



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“Análisis del Derecho de Extranjeros a no ser Expulsados del País
Colectivamente Conforme a la IV Disposición Constitucional.”**

**PRESENTADA PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADA.**

AUTOR:

Bachiller Reupo Vásquez Ana Milena.

ASESOR:

Magister Delgado Paredes Francisco Santiago.

LAMBAYEQUE, 2019

**Tesis denominada “Análisis del Derecho de Extranjeros a no ser Expulsados del País Colectivamente Conforme a la IV Disposición Constitucional”,
presentada para optar el Título de Abogada, por:**

.....

BACHILLER

Ana Milena Reupo Vásquez

.....

ASESOR

Mag. Francisco Santiago Delgado Paredes

APROBADO POR:

.....

PRESIDENTE

Mg. Oscar Vílchez Vélez

.....

MIEMBRO

Dr. Freddy Hernández Rengifo

.....

VOCAL

Dr. Humberto Falla Lamadrid

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA N° 201

Sustentación para optar el Título de Abogado de la **Señora: Ana Milena Reupo Vásquez.**

En la ciudad de Lambayeque, en Salas de sustentaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; siendo las 4:00 p.m. del día miércoles 11 de setiembre del 2019, se reunió el Jurado conformado por los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE	: Mag. OSCAR RAMON VILCHEZ VELEZ.
SECRETARIO	: Dr. FREDDY HERNANDEZ RENGIFO.
VOCAL	: Dr. HUMBERTO FALLA LAMADRID

Con el objeto de calificar la sustentación de la Bachiller **Ana Milena Reupo Vásquez**, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante la Modalidad de Presentación, Sustentación y Aprobación de Tesis.

El señor Presidente invita a la sustentante para que exponga la Tesis titulada: "**ANÁLISIS DEL DERECHO DE EXTRANJEROS A NO SER EXPULSADOS DEL PAÍS COLECTIVAMENTE CONFORME A LA IV DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL**".

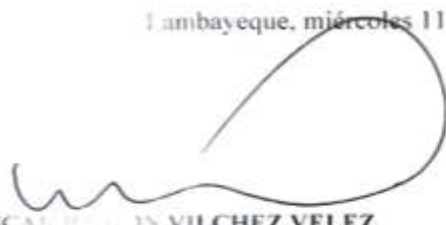
Rendido por la bachiller: **Ana Milena Reupo Vásquez**, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", autorizada con Resolución N° 138-2019-UI-FDCP-UNPRG, de fecha 04 de setiembre del 2019, en cumplimiento al requisito para optar el Título Profesional de ABOGADO, exigido en el Reglamento del Vicerrectorado de Investigación y de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

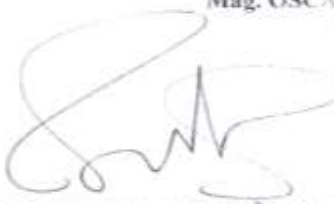
Obteniendo el siguiente resultado: *Aprobada* con la nota de *17.82* y el calificativo de *Bueno* y apta para obtener el Título Profesional debiendo cumplir con las exigencias de las normas legales vigentes.

Siendo las *17:00* p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado la presente acta.

Se expide la presente a solicitud de la interesada, para los fines que estime pertinente.

Lambayeque, miércoles 11 de setiembre del 2019


Mag. OSCAR RAMON VILCHEZ VELEZ
Presidente del Jurado


Dr. FREDDY HERNANDEZ RENGIFO
Secretario del Jurado


Dr. HUMBERTO FALLA LAMADRID
Vocal del Jurado.

DEDICATORIA

Dedico esta tesis en primer lugar a Dios y a familia que me apoyaron incondicionalmente en la travesía universitaria, y en cada paso que doy en mi desarrollo personal y profesional.

A los docentes de la Escuela de Derecho de mi alma máter, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, quienes compartieron sus conocimientos y me ayudaron a querer más a esta carrera que como ya lo han dicho algunos, autores, es muy sacrificada.

AGRADECIMIENTO

Durante el desarrollo de esta investigación, con la que culmino mi etapa de pregrado, he recibido un apoyo incondicional de parte de las personas a mi entorno, por eso quiero agradecer, poniendo en primer lugar a Dios que sin él no hubiera superado los obstáculos que se me presentaron durante esos 6 años en aulas universitarias, que me permitió poner de manifiesto la tenacidad y paciencia para alcanzar mis objetivos. A mi madre y hermano, quienes me apoyaron y creyeron en mí, aun cuando ya no quería seguir y que me alientan no solo a ser una mejor profesional, sino sobre todo a ser una mejor persona. A mis compañeros y docentes universitarios, quienes me compartieron no solo conocimientos, si no que me permitieron participa de un pedazo de sus vidas y de sus vivencias. Para todos ellos va este trabajo pues de alguna forma contribuyeron a que esto pueda hacerse realidad.

CONTENIDO

DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO	5
RESUMEN.....	8
ABSTRACT.....	9
INTRODUCCIÓN.....	10
CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS.....	12
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	12
1.2. Formulación del problema.	12
1.3. Justificación del estudio.	13
1.4. Objetivos.	13
1.4.1. Objetivo General.	13
1.4.2. Objetivos Específicos.	13
1.5. Hipótesis.....	14
1.6. Variables.....	14
1.6.1. Variable independiente.	14
1.6.2. Variable dependiente.	15
1.7.1. Métodos.....	15
1.7.2. Técnicas.	16
1.7.3. Instrumentos.....	16
PARTE I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES NO ENUMERADOS.	17
1. DERECHOS FUNDAMENTALES	17
2. LA DIGNIDAD HUMANA.....	19
3. DERECHOS FUNDAMENTALES NO ENUMERADOS	20
3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	21
3.1.1. ESTADOS UNIDOS.	22
3.2. ESTRUCTURA.....	27
3.3. DERECHOS FUNDAMENTALES NO ENUMERADOS EN LAS CLAÚSULAS DE LA CONSTITUCIÓN PERUANA.	29
PARTE II: DERECHO NO ENUMERADO DE LOS EXTRANJEROS A NO SER EXPULSADOS DEL PERÚ COLECTIVAMENTE.....	32
1. ANTECEDENTES.....	34
1.1. EE.UU.....	35
1.2. EUROPA.....	35
2. SOBERANÍA.	36
3. ÁMBITO EXTRA REGIONAL: ARTÍCULO 4 DEL PROTOCOLO N° 4.....	38
4. LA EXPLUSIÓN DE EXTRANJEROS EN EL PERÚ.....	39
4.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APLICABLES.	41

4.2.	EXTRANJEROS EN EL PERÚ.....	43
4.3.	MARCO JURÍDICO NACIONAL.....	44
5.	REQUISITOS PARA CONSIDERARE UNA EXPULSION COLECTIVA.....	45
6.	LA EXPULSIÓN COLECTIVA COMO INFRACCIÓN DEL DEBIDO PROCESO.	47
7.	JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL.....	49
7.1.	Caso Becker vs. Dinamarca.....	49
7.2.	Caso Andric vs. Suecia.	50
7.3.	Caso Čonka v. Bélgica.	51
7.4.	Hirsi Jamaa y otros vs. Italia.	52
	PARTE III: MECANISMOS CONSTITUCIONALES FRENTE A LA VULNERACIÓN DE ESTE DERECHO.....	54
	CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS.	60
1.	LA INMIGRACIÓN EN EL PERÚ.....	60
1.1.	EXTRANJEROS CON CARNET DE EXTRANJERÍA:.....	62
1.2.	MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR:	63
1.1.3.	INMIGRANTES SEGÚN SU SITUACIÓN:	63
1.4.	EXTRANJEROS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:	64
1.5.	EXTRANJEROS DE ACUERDO A SU NACIONALIDAD:	64
1.6.	DE ACUERDO A SU OCUPACIÓN, AL AÑO 2017:	65
2.	SENTENCIAS ANALIZADAS.	65
2.1.	Caso Nadege Dorzema vs. República Dominicana.	65
2.2	Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.	67
	CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	69
	CONCLUSIONES.....	70
	RECOMENDACIÓN.	71
	BIBLIOGRAFÍA.....	72

RESUMEN.

Esta investigación va a analizar el derecho no enumerado de los extranjeros a no ser expulsados del Perú de manera colectiva, a propósito del creciente fenómeno migratorio en nuestro país; esto cuando se da fuera de la soberanía que posee el Estado, de una manera arbitraria. Siendo un derecho implícito, merece especial tratamiento para poder determinar sus alcances, límites y requisitos, además de los mecanismos constitucionales para su protección; pues nos enfrentamos ante un gran reto cuando se presenta un caso de vulneración, puesto que no ha sido tratado de manera profunda ni por la doctrina ni por la jurisprudencia peruana. Para ello se deberá recurrir a la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política que nos da una salida para incorporar nuevos derechos y mantener actualizado el catálogo legal, pudiendo remitirnos a normas internacionales ratificadas por el Perú, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos inciso 9 del artículo 22° y la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en su artículo 22° inciso 1, los cuales tratan puntualmente el derecho materia de estudio.

ABSTRACT.

The present investigation is going to analyze the unlisted right of foreigners not to be expelled from Peru collectively, on purpose the growing phenomenon of migration in our country; specifically when it happens outside the State's sovereignty, in an arbitrary manner.

Being an implicit right, it deserves special treatment to be able to determine its scope, limits and requirements, furthermore the constitutional mechanisms in order to protect it. On top of that because we are facing a great challenge when we have a case of infringement. And this happens naturally because this matter has not been regulated in a profound way neither by the doctrine nor by the Peruvian jurisprudence. For that reason we will have to resort to the fourth Final and Transitory Provision of the Constitution that gives us an outlet to incorporate new rights and keep our legal system updated.

In this way we could refer to international standards ratified by Peru, specifically to American Convention on Human Rights under section 22°, paragraph 9, and The International Convention on The Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Families, under section 22°, paragraph 1, which treat punctually the right that is the object of study in the present investigation.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno migratorio de los últimos años en el Perú ha ido incrementando de forma exponencial, ello sumado a los diversos requerimientos actuales a los que son sometidos los Estados, haciendo necesario que el catálogo normativo se mantenga actualizado y los mecanismos legales y constitucionales se encuentren listos para enfrentar una nueva situación no regulada taxativamente, pero que ingresa al ámbito interno mediante Acuerdos Internacionales de los que el Perú es parte.

En razón a lo anteriormente mencionado, es claro que la actualización del listado de derechos constitucionales debe ser elaborada y ejecutada con gran urgencia de modo que se ajuste a las observancias de los parámetros constitucionales antepuestos para su tratamiento. El objetivo de la tesis es analizar el derecho fundamental implícito de la no expulsión “en masa” de extranjeros, siendo necesario identificar los antecedentes históricos, la jurisprudencia, doctrina internacional, el derecho comparado, de esta forma podremos investigar cómo ha sido recogido este derecho en otras latitudes y así poner límites a las interferencias externas a la esfera protegida; para realzar de esa forma la importancia de que la legislación de extranjería se adapte a los nuevos tiempos y no contenga elementos que abran paso a la afectación de los migrantes que viven en nuestro país. He creído necesario además, indicar que uno de los objetivos será comprender el régimen jurídico de la expulsión en Perú como infractor del debido proceso, de esta forma se intentará determinar si existe una práctica de expulsiones colectivas en nuestro país, abordándolo como una manifestación concreta del incumplimiento del debido proceso en los casos de expulsiones, desde la óptica internacional que mediante sus considerandos ha entregado criterios para determinar cuándo estamos frente a ella, para finalmente determinar si las expulsiones que ordena el Estado de pueden catalogarse como tales.

Este trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos, la parte inicial, hace referencia a los “Aspectos Metodológicos”, que fueron utilizados durante el desarrollo del proyecto y de la investigación; el segundo capítulo “Marco Conceptual”, detalla en un primer momento, Derechos Fundamentales no

Enumerados, registrados en el artículo 3 y en la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución; en el segundo punto, se hablará del derecho en sí de no expulsión “en masa” y de paso se hará referencia a la política migratoria con la que cuenta el Perú, para expulsar a un extranjero de forma individual, lo que nos permitirá hacer frente a un caso naturaleza colectiva. En la parte tercera “Mecanismos Constitucionales frente a la Vulneración de este derecho”, se habla principalmente de la Acción de Amparo y el Hábeas Corpus. El Capítulo III examinará las sentencias que se hayan emitido en torno al tema de investigación y cómo estas pueden aplicarse al ámbito nacional sin que ello trasgreda la soberanía del Estado.

La parte final de este trabajo se refiere a la contratación de la hipótesis inicialmente planteada, a las conclusiones que hemos arribado luego de hacer el análisis exhaustivo y las recomendaciones a tener en cuenta cuando se presente una situación como la descrita.

Lambayeque, setiembre del 2019.

CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.

1.1. Planteamiento del Problema.

Los tratados internacionales respecto a los derechos humanos y a la Constitución Política, protegen los derechos fundamentales de los nacionales y extranjeros, siendo para ello necesario analizar las disposiciones que establezcan de manera directa y expresa que la enumeración o no enumeración no suprimen otros derechos que se originen de la naturaleza humana o del sistema político, manteniendo así abierto, renovado y actualizado el catálogo de derechos, además de responder al principio de no exclusión tal como establece el artículo 3° y la IV Disposición Final y Transitoria Constitucional; en este mismo sentido, el artículo 31° de la Convención Americana de D.D.H.H, el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 52 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos por mencionar algunos. Así en los últimos años en el Perú se ha registrado un masivo movimiento migratorio lo que ha generado que el Estado peruano haciendo uso de su soberanía haya expulsado a extranjeros que no cumplían los requisitos estipulados en la normativa, sin embargo se destaca en muchos casos el abuso en la expulsión de extranjeros de manera colectiva lo que contravendría la Convención Americana en el artículo 22° inciso 9 y la Convención Internacional sobre Protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en su artículo 22° inciso 1, derecho no enumerado en nuestra Constitución, pero que debe aplicarse por ser parte de la sistema internacional referente a (Derechos Humanos).

1.2. Formulación del problema.

El problema surge en ¿cómo afrontamos en la realidad una afectación al derecho innominado de los extranjeros a no ser expulsados del

Perú de manera colectiva para incluirlo en la esfera de defensa de los derechos constitucionales?.

1.3. Justificación del estudio.

Esta investigación se torna importante cuando verificamos la necesidad de materializar los derechos no enumerados en nuestra Constitución Política y necesiten una especial argumentación, en este caso el derecho que ha sido reconocido por organismos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares de quienes el Perú es parte, por tanto deberán aplicarse de modo que permitan tutelar los intereses de los extranjeros en nuestro territorio, debiendo dilucidarse cada proceso de forma independiente con plena identificación del extranjero y considerando las circunstancias que rodean las decisiones de expulsión.

1.4. Objetivos.

1.4.1. Objetivo General.

- Examinar el derecho no enumerado en la Constitución Política Peruana, sobre la no expulsión colectiva de extranjeros en territorio peruano y conocer las alternativas frente a este problema, haciendo uso de mecanismos constitucionales efectivos como el amparo y el habeas corpus frente a esta vulneración.

1.4.2. Objetivos Específicos.

- Conocer y estudiar los principios del Derecho Internacional en relación a los Derechos Humanos que tengan concordancia con los derechos no

enumerados en la Constitución Política del Perú.

- Describir y determinar cuál es el ámbito de protección en el que se encuentran inmersas las garantías de no expulsión colectiva de extranjeros dentro del ordenamiento jurídico nacional y el internacional ratificado por el Estado.
- Investigar e identificar los mecanismos adecuados para el tratamiento del derecho innominado de no expulsión colectiva de extranjeros y lograr así la aplicación de un procedimiento correcto.
- Analizar la dimensión normativa del derecho de no expulsión colectiva de extranjeros en la legislación comparada.

1.5. Hipótesis.

Una respuesta que puede darse al problema planteado consiste en que se debe poner especial énfasis en el procedimiento y presupuestos predeterminados para la expulsión de extranjeros de territorio nacional, los cuales deberán ser evaluados de forma independiente atendiendo las características específicas, además de observar en todo momento lo previsto en nuestra Carta Magna y tratados internacionales a través de los dispositivos que permiten incluir derechos no enumerados, pues las autoridades deberán emitir pronunciamiento que protejan el derecho de cada extranjero a no ser expulsado en forma colectiva, pues al ser un derecho que actualmente toma notoriedad con la situación social del Perú, haciendo uso de figuras constitucionales.

1.6. Variables.

1.6.1. Variable independiente.

La protección de los derechos innominados a

partir de los tratados internacionales ratificados por el Perú concordante con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución.

1.6.2. Variable dependiente.

El tratamiento del contenido implícito del derechos de no expulsión colectiva de extranjeros en el Perú.

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.7.1. Métodos.

1.7.1.1. Métodos generales.

- **El Método Analítico:** Se utilizó en el análisis de los Tratados y sentencias internacionales que fundamentaban el derecho no enumerado de expulsión colectiva de extranjeros.
- **El Método Histórico:** Utilizado en el estudio de los antecedentes de los derechos no reconocidos y en la evolución de la jurisprudencia en torno al derecho no enumerado de expulsión colectiva de extranjeros.
- **El Método Descriptivo:** Utilizado para la evaluación de la evolución de las sociedades frente a nuevos supuestos de derechos no reconocidos.
- **El Método Sintético:** Se utilizó al reconstruir sucesos de la historia de forma resumida, permitiendo enfocarnos en puntos clave de la historia.

1.7.1.2. Métodos específicos.

- Observación del fenómeno social.
- Interpretación conforme la Constitución.
- Interpretación de los tratados internacionales

ratificados por el Perú.

- Derecho Comparado.

1.7.2. Técnicas.

- Fichas de Libros.
- Fichas de artículos jurídicos
- Análisis de tesis
- Resumen de libros, artículos, documentos, etc.

1.7.3. Instrumentos.

- Entrevistas.
- Observación.

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL.

PARTE I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES NO ENUMERADOS.

1. DERECHOS FUNDAMENTALES

Empecemos definiendo qué se entiende por derechos fundamentales, considerándolos como “bienes susceptibles de protección” los cuales conceden a las personas, la posibilidad de desenvolverse en la sociedad, sirviendo para identificar los DD.HH. tipificados en la legislación interna, en cuanto a que la mencionada expresión, es más utilizada en el ámbito internacional.¹ Esto es reafirmado por el doctrinario nacional, Gerardo Eto Cruz, en su libro Derecho Procesal Constitucional, donde señala que los derechos fundamentales representan el acopio de los derechos en el territorio nacional, actuando como límites al actuar de los poderes públicos.²

El Tribunal Constitucional, también define los derechos fundamentales, manifestando que, el establecimiento de valores supremos, es decir del componente estructural básico del orden constitucional, en razón de que “son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política (...) el fundamento del orden jurídico y de la paz social”³. Este sistema de valores y principios son de alcance universal que subyacen a la misma Declaración Universal y a los diversos instrumentos jurídicos ratificados por el Perú.⁴

Otra definición que sigue esta misma línea es la brindada por el jurista Víctor Ortecho, “derechos esenciales que se han recepcionado, cimentado y robustecido dentro de un ordenamiento constitucional y que están conformados por las libertades, que, además de ser derechos

¹ Crf. Sentencia N°050-2004-AI/TC. Fundamento Jurídico 72.

² Crf. ETO CRUZ, Gerardo. Derecho Procesal Constitucional. Su interpretación y desarrollo jurisprudencia. Grijley E.I.R.L. Sexta Edición. Lima, febrero del 219 páginas 341-342

³ Sentencia N° 0976-2001-AA/TC. Fundamento Jurídico N.º 5.

⁴ Ibídem pie de página 2. Pág. 351.

subjetivos que protegen a dignidad de la persona humana, son derechos objetivos que dan solidez a la sociedad y al Estado”⁵.

Asimismo cabe destacar que el Constitucionalismo y la Constitución, se originaron con la necesidad de sortear el hecho de que el poder sea ejercido, interceptando y atravesando la esfera de autodeterminación individual de las personas; es así que la Constitución deberá ser admitida como la mayor herramienta jurídica dirigida a limitar de manera efectiva el ejercicio del poder, principalmente el político. Los Estados adquieren diversas obligaciones en materia de derechos humanos, lo cual implica la garantía para su protección, en salvaguarda de las personas bajo su jurisdicción, las cuales han quedado enunciadas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2° y en la Convención Americana de Derechos Humanos en los dos primeros artículos. Es así que el TC Peruano ha indicado respecto a los DD.HH. que estos establecen los límites frente al gobierno de turno en un estado, abarcando tanto órganos como funcionarios; siendo ilícito y anticonstitucional el ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por tratados y convenciones internacionales que fueron reconocidos por el Perú.⁶

Debemos además tener claro que los derechos fundamentales no son absolutos, si no relativos, pues su ejercicio y goce están limitados por otros derechos constitucionales.⁷ Asimismo debemos hacer referencia al aspecto binario de los derechos fundamentales, es decir que además de tener un contenido esencial, también posee ciertos límites, tanto intrínsecos como extrínsecos.

La evolución de los derechos fundamentales a lo largo de la historia de los diferentes pasajes sociales internos, los derechos pasan a convertirse en derechos supraestatales, siendo ya no solo límites internos, sino también

⁵ (ORTECHO VILLENA, Edición 2006). Págs. 26-27.

⁶ Crf. Sentencia N° 5854-2005-PA/TC. Fundamento Jurídico 27.

⁷ Sentencia N° 3-2005-AI/TC. Fundamento jurídico 42.

externos, desarrollándose una democracia internacional que da pase al derecho internacional de los derechos humanos, permitiéndonos hablar también de una jurisdicción supranacional, que busca la amparar a los derechos vulnerados. La profesora Susana Otsu Castañeda indicó que la internacionalización de los derechos comenzó en 1945, con la suscripción de la Carta de Organización de las Naciones Unidas, sin embargo empezó su desarrollo con la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.⁸

2. LA DIGNIDAD HUMANA

Es necesario hacer un ítem especial sobre la dignidad humana, si bien no la analizaremos a fondo, sí observaremos la gran trascendencia que tiene en los derechos no enumerados; desde esta perspectiva, el principio de dignidad aparece como el más importante, desde donde es posible encontrar la justificación de los derechos constitucionales. Es necesario remarcar que la Declaración Universal se basa en la DIGNIDAD de la persona, que es el valor supremo a tener en cuenta por los Estados, ello permite remitirnos a diferentes documentos y tratados internacionales, para dar una interpretación correcta de las Constituciones o normas, cuando estemos frente a una supuesta vulneración de derechos implícitos.

El TC. En una de sus sentencias, expuso que la dignidad del ser humano, se erige como el fundamento principal de todos los derechos que habilita nuestro ordenamiento; es así que desde el primer artículo de nuestra Constitución queda claro, pues se orienta al reconocimiento de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, considerándolos de manera expresa, como el “fin supremo de la sociedad y del Estado”, apoyándose en el artículo 3°, el cual dispone que la enumeración de los derechos no establecidos, no excluye a otros que la Constitución garantiza, ni otros que se fundamenten en la dignidad del hombre.⁹ La dignidad de la

⁸ Crf. (CASTAÑEDA OTSU). Pág. 116.

⁹ Crf. Sentencia N°2273-2005-HC/TC. Fundamento Jurídico 5.

persona se presenta como una justificación de los derechos subjetivos con los que cuenta la persona que bien pueden estar detallados o no, los cuales son necesarios, pues la sociedad no es estática y se reinventa con el paso del tiempo.

La tesis “Chile análisis de derechos constitucionales implícitos” citando a Humberto Nogueira¹⁰ indica que la dignidad humana proyecta un detalle especial independiente de tiempo o espacio, dándole a cada persona un espíritu impersonal, otorgándole la facultad de tomar sus propias decisiones sobre sí mismo, sobre su conciencia y sobre la percepción de su entorno.¹¹ Lo dicho anteriormente nos lleva a la conclusión que por medio de la dignidad humana, podemos dotar de protección a los derechos fundamentales no enumerados, dado que vivimos en una sociedad cambiante, que presenta situaciones que pueden vulnerar la esfera íntima de la persona humana.

En el sistema regional debemos destacar como bien lo ha dicho la profesora Susana Otsu en la página 120 de su libro citado, que, el documento jurídico más importante del sistema regional americano es la el Pacto de San José¹² y que como veremos más adelante da tratamiento a los derechos no enumerados en las distintas Constituciones que la han ratificado, además de expresar explícitamente en su contenido, la no expulsión colectiva de extranjeros.

3. DERECHOS FUNDAMENTALES NO ENUMERADOS

En primer lugar, debemos saber que generalmente los derechos explícitos no necesitan de una especial argumentación para ser reconocidos, por su mismo carácter, siendo simplemente declarados para que sean aplicados de manera efectiva, todo lo contrario ocurre con los derechos constitucionales implícitos, los cuales por no encontrarse determinados en

¹⁰ (NOGUEIRA ALCALÁ, Chile)

¹¹ (NAVARRO ARACENA, 2015). Pág. 17.

¹² Aprobada el 21 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, entrada en vigor el 18 de julio de 1978.

la Constitución, requieren de una carga argumentativa especial, además de suficiente, evidenciando su reconocimiento como derechos constitucionales.¹³

Torres Bayona citado en el texto denominado Derechos Innominados en el Sistema Interamericano¹⁴, los define como aquellos derechos implícitos en el ámbito de protección de distintas disposiciones jurídicas constitucionales, pero que, sin embargo, no se encuentran textualmente enunciados en la Carta, la Constitución los consagra pero no los nomina. La determinación de un derecho no enumerado implica el reconocimiento de un derecho fundamental, por lo que se consideraría como derechos constitucionales, pues es la misma carta fundamental quien les da sustento a dicho reconocimiento.

Es necesario comprender el texto constitucional como una interpretación, donde el razonamiento de los jueces, permite solucionar casos difíciles, mediante el test de proporcionalidad, haciendo posible la creación de sentencias legislativas, las mismas que permiten crear la teoría de los derechos innominados, sea mediante el control difuso o mediante el control concentrado de constitucionalidad.¹⁵

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Citaremos algunos puntos de la historia para poder ingresar al contenido central de la presente investigación, para ello debemos analizar como en las constituciones iniciales, ciertos derechos se establecieron de manera explícita, y otros no fueron considerados.

El profesor uruguayo Germán Bidart Campos¹⁶ ha señalado que desde la Constitución de Filadelfia se dio inicio al Constitucionalismo moderno, la misma que a diferencia de otros catálogos de su época, no

¹³ (CASTILLO CORDOVA, Mayo 2008). Pág. 6.

¹⁴ (GARZÓN BUENAVENTURA, Octubre del 2016). Pág. 21.

¹⁵ Ibídem pie de página 12. Pág. 15.

¹⁶ (BIDART CAMPOS). Pág. 256.

enumeraba los derechos de los ciudadanos¹⁷. Debemos evocar entonces la escuela anglosajona, donde además del texto escrito, la ley o la Constitución, en la versión norteamericana, se continuó con los estudios sobre la existencia de derechos presuntos dando lugar a los derechos innominados, como se observa de la IX Enmienda de la Constitución Norteamericana.

3.1.1. ESTADOS UNIDOS.

Nos situamos en el año 1765 donde diversos representantes de las distintas colonias norteamericanas, se reunieron en Nueva York, para discutir las nuevas reglas que Gran Bretaña introdujo para gravar el consumo de algunos productos y discutir la falta de representación que tenían los colonos en las asambleas, este planeamiento no tuvo gran acogida en el reino; ello generó un gran descontento, convirtiéndose pronto en una discusión política-filosófica centrada en la legitimidad del reino británico para imponer tributos en América, por lo que rápidamente se propagaron las ideas de separación; a partir de ello, los diversos Estados aumentaron la el deseo de elaboración de Constituciones propias, las que en un inicio, simplemente reconocieron derechos mínimos frente al poder real, sin embargo estas fueron evolucionando y eliminaron así cualquier sujeción al favor de la autoridad monárquica.

El 8 de junio de 1789, James Madison, presentó un proyecto del cual se desprende el antecedente de la mencionada cláusula de derechos no numerados, pues planteaba que “la excepción que se haga en cualquier punto de la Constitución en favor de derechos particulares, no se interpretará en el sentido de que disminuya la justa importancia de otros derechos retenidos por el pueblo, o que amplía los poderes delegados por la Constitución; sino como efectivas limitaciones de tales poderes o como

¹⁷ Crf. (LOBATON PALACIOS, Mayo del 2016). Pág. 28, citando a Ferreira.

incluidos meramente por vía de mayor precaución”¹⁸; la cual finalmente fue adscrita al Bill of Rights, que fue ratificada el 15 de diciembre de 1791.

Es así que se agregó, de manera detallada, diversos derechos y libertades, siendo la IX Enmienda la que más sobresale, pues indica que “No por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo”, registrando así innegables derechos, que aunque no fueran contemplados de manera expresa, eran considerados como fundamentales.

Posteriormente, en los años 60, como lo señala el profesor Gonzalo Candía, citado en la Tesis denominada el Análisis Crítico de los Derechos Constitucionales Implícitos, esta categoría de derechos empezó a utilizarse de manera constante, en los Estados Unidos a partir años 60, con el fin de justificar, la nueva jurisprudencia, originada de pretensiones sociales y que no tenían origen expreso en el ordenamiento interno, la categoría de los derechos no enumerados o derechos implícitos”.

3.1.2. FRANCIA.

En Francia ocurrió algo diferente, allí se expidió la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, la cual contó con consideraciones filosóficas y políticas, propias del iusnaturalismo racionalista, sin embargo a pesar que los franceses fueron testigos de la experiencia norteamericana en materia de derechos, no la tomó en cuenta al momento de elaborar la mencionada declaración, pues esta tenía la idea de elaborar un decálogo humano escrito en todos los idiomas, exponiéndose de forma solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de cada persona.

En ese marco ideológico, unos años más adelante, en setiembre de 1791, se aprueba la Constitución Francesa, la misma que en su título I, avala como derechos naturales y civiles los expresados en la Declaración de

¹⁸ Ibídem pie de página 16. Pág. 17.

1789, sin embargo esta naciente Constitución, no hace ningún esfuerzo por introducir una disposición similar a la que contaba la Constitución Norteamericana, porque se creía que introducirla carecería de sentido pues estos derechos, siempre fueron naturales, por tanto en ningún momento perdieron su condición.

Actualmente en Francia, el bloque de constitucionalidad tiene su asentamiento en la Constitución de la V República de Francia de 1958, y en el fallo del Consejo Constitucional del 16 de julio de 1971, en el cual se determina el objeto vinculante del preámbulo constitucional como la interpretación de los principios fundamentales de la República en el control de constitucionalidad. De esto se toma que el bloque de constitucionalidad corresponde a normas de contenido implícito que no están descritas en el texto constitucional, pero, dada su naturaleza jurídica, son fuerza directa para la aplicación del Derecho.¹⁹

3.2. CONSIDERACIONES.

Estos derechos no enunciados son reconocidos también doctrinariamente como derechos implícitos o derechos inherentes, pues las Constituciones no atribuyen o crean derechos, sino que se limitan a proclamar algunos derechos preexistentes y a garantizar y proteger su existencia y si algunos son especialmente enumerados y protegidos, solo es porque son singularmente importantes o expuestos a ser invadidos.

Las cláusulas de derechos no enumerados permiten conocer ámbitos específicos de humanidad que valen y merecen tutela como derechos fundamentales, aunque no estén considerados así en la Constitución, para ello es necesario construir una norma de derecho fundamental, a partir de los criterios sustantivos de la propia Carta. La aparición de cláusulas de derechos no enumerados se encuentra estrechamente relacionada con el pensamiento constitucional liberal, siendo considerado conservador el

¹⁹ Ibídem pie de página 12. Pág. 13.

reconocimiento explícito de derechos, pues era preferible estar atentos y dejar abierta la posibilidad de proteger todos ellos, antes que limitar el reconocimiento manifiesto para unos pocos.²⁰ Los derechos implícitos al no encontrarse aún expresados de manera clara o certera en la Constitución, necesitan una especial argumentación, requieren ser avalados para que puedan ser reconocidos como derechos constitucionales.

Héctor Gross Espiell recomienda con razón práctica, que es útil y necesario incluir en las Cartas Supremas disposiciones que establezcan de manera directa y expresa, que la enumeración o la enunciación de derechos no es taxativa y que ella no excluye otros que derivan de la naturaleza humana o de los caracteres esenciales del sistema político.²¹

Asimismo este autor señala dos razones por las que un derecho no enunciado, es protegido y garantizado constitucionalmente: 1) Porque es inherente a la personalidad humana. 2) Porque deriva de la forma republicana de gobierno,²² siendo en este caso los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados parte, sumado al principio pro homine, justifican que los derechos deben interpretarse ampliamente, de modo que dicha interpretación se apoye en el texto literal y en el espíritu de la norma. Del mismo parecer es el jurista Juan Sosa Sacio, indicando que la fundamentación de estos derechos en el Estado Constitucional, “no solo les permite, sino incluso obliga a la apertura de la lista de derechos fundamentales, lo cual justifica la existencia de las cláusulas números apertus. Y lo que se prevea en un determinado momento no siempre logrará satisfacer las más elevadas necesidades o intereses humanos, ni brindará protección frente a nuestros más odiosos impulsos”.²³

La doctrina tradicionalista, distingue y clasifica de dos formas a los derechos constitucionales implícitos, la primera clasificación, se infiere de

²⁰ (SOSA SACIO). Pág. 98.

²¹ (GROSS ESPIELL, enero-diciembre. 2000). Págs. 146-ss.

²² Ibídem pie de página 20. Pág. 154.

²³ Ibídem pie de página 20. Pág. 109.

los mismos derechos no enunciados, y otro grupo toma como base, los principios y fines constitucionales concretizados en la “personalización” de estos nuevos derechos, es decir se deducen de los que ya se encuentran enunciados, estos a su vez se sub-clasifican en: a) los que aclaran el contenido tácito, límites y alcances del derecho, el cual aunque podría tratarse como parte de aquel, no obstante, puede configurarse de manera autónoma, b) los que aparecen como un derecho autónomo comprendido dentro del enunciado mayor y, c) los que a partir de una interpretación amplia, de un derecho que abarca varios “derechos específicos” y que se van desprendiendo a partir de una evolución sociocultural.

Germán Bidart Campos²⁴, declara que cuando se habla de derechos no enumerados, se debe enfrentar que la implicitud de los derechos que no tienen norma de confianza, y que estos tengan contenidos que permitan el desarrollo de los derechos no expresados y que se suman a los ya conocidos. Cuando alguna Constitución hace referencia a tratados internacionales, esto permitirá resguardar la idea que los derechos que constan en normas que se hayan “fuera” de la Constitución, deben tener mérito como derechos que se encuentran tácitos en el ordenamiento, asimismo, cuando nos encontramos a un caso opuesto, es decir cuando un tratado queda abierto a “nuevos” derechos que surgen de una fuente internacional o del derecho interno de otro estado; lo explícito de las dos fuentes alimenta lo implícito, resultando un mismo conjunto de derechos.

En esa línea, el Pacto de San José de Costa Rica estableció en su artículo 29° las reglas para su interpretación, mencionando tres pautas alusivas a derechos implícitos: “*ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros*

²⁴ Crf. Ibídem pie de página 14. Págs. 256-257.

derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de Derechos del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.

El artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, indica en su apartado 2: *“No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los Derechos Humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.* El artículo 41° de la Convención sobre Derechos del Niño, deja de manifiesto que, *“Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará las disposiciones reconocidas en: a) El derecho de un Estado parte; o b) El Derecho Internacional vigente con respecto a dicho Estado”.* El artículo 23° de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: *“Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombre y mujeres y que pueda formar parte de: a) La legislación de un estado parte; o b) cualquier otra Convención, Tratado o Acuerdo Internacional vigente en ese Estado”;* y así podríamos seguir mencionando fuentes internacionales, sin embargo ha quedado clara la idea de no restricción de derechos fundamentales por el hecho de no estar contenido explícitamente en un cuerpo normativo, ello incluso en Estados que no cuenten con una cláusula de números apertus.

3.2. ESTRUCTURA.

Los derechos fundamentales no enumerados, contrario a los escritos, no cuentan con disposiciones fundamentales expresas en la Constitución de la que puedan extraerse, por lo tanto como lo explica Sosa Sacio²⁵, deberá

²⁵Ibídem Sosa Sacio. Pág. 113.

“construirse” la norma del derecho fundamental no implícito, adscribiéndose al algún enunciado lingüístico que le dé nombre al derecho, el mismo que tendrá base en la Constitución Peruana, siendo necesario acudir a las cláusulas de derechos implícitos, siendo el juez el encargado de enunciar la norma de derecho fundamental a la que deberá adscribirse, teniendo en cuenta el principio universal de dignidad, además de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno con sus respectivos límites, lográndose así el ubicar el contenido protegido constitucionalmente.

El soporte, en el caso de los derechos implícitos se refiere a la existencia de normas iusfundamentales con directo arraigo constitucional, en nuestro caso en el artículo 3° y la IV Disposición de la Carta Magna, siendo a partir de estas artículos, necesaria su descripción.

La validez de la norma implícita del derecho iusfundamental, requiere una especial carga argumentativa, con argumentos sustantivos que derivan su fuerza de la corrección de su contenido; es decir no bastarán los argumentos posibles, sino que la argumentación debe ser correcta, lo que incluye un deber de fundamentación y una pretensión de justicia, siendo esto necesario porque en los derechos no enumerados, no existen normas iusfundamentales estatuidas directamente, sino una norma que habilita la creación de nuevos derechos constitucionales, esta especial justificación es necesaria incluso para legitimar democráticamente la innovación en el ordenamiento constitucional.

El juez al reconocer los derechos no enumerados, es necesario acreditar la fundamentalidad, singularidad y configuración como derechos específicos y que no se traten de ámbitos claramente proscritos por el ordenamiento peruano.

3.3. DERECHOS FUNDAMENTALES NO ENUMERADOS EN LAS CLAÚSULAS DE LA CONSTITUCIÓN PERUANA.

Artículo 3°: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se funden en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.”

Artículo 55°: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”

IV Disposición Final y Transitoria: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas ratificados por el Perú”.

Artículo 27° de la Convención de Viena: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado.”

La Constitucional peruana de 1993, tiene como pilar su artículo 1°, del cual se derivan las demás disposiciones, permitiendo así que podamos considerar al Perú como un estado Constitucional interamericano.

De acuerdo al Tribunal Constitucional, la protección y el respeto de la dignidad humana, es una identidad compartida por el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los DD.HH.: “Los Tratados

*Derechos Humanos no solo forman parte positiva del ordenamiento jurídico nacional (artículo 55 de la Constitución), sino que la Cuarta Disposición Final y Transitoria, exige a los poderes públicos nacionales que a partir del ejercicio hermético, incorporen en el contenido protegido de los Derechos constitucionales, los ámbitos normativos de los Derechos Humanos reconocidos en los referidos tratados”*²⁶, esto refrendado además por la sentencia N° 5854-2005-AA/TC.

El artículo 3° y la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución peruana deben ser interpretados de manera conjunta sin exclusiones entre ellas. Por un lado el artículo 3° prevé lo que conocemos como “cláusula abierta”, la misma que anuncia el reconocimiento de derechos fundamentales no consagrados expresamente en el ordenamiento jurídico interno, pero que pueden desprenderse, bien sea a través de instrumentos internacionales o por ser inherentes a la dignidad humana.

Eso es lo que ha trabajado el Tribunal Constitucional a través de su amplia jurisprudencia, en las últimas dos décadas, desde la recuperación de la democracia, vía interpretación constitucional reconociendo derechos no contemplados literalmente en la Constitución pero que claramente pueden desglosarse. La relación de los derechos fundamentales que se encuentran en nuestra Constitución, y además las que se declaran a través de las cláusulas de derechos implícitos, han permitido que en nuestro ordenamiento jurídico, todos los derechos se hayan convertido en derechos fundamentales que a su vez sean considerados derechos constitucionales.

Asimismo el T.C ha precisado, que la cláusula de desarrollo de los derechos fundamentales, permite a los nuevos derechos directamente vinculados con la dignidad, no puedan ser desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones, reconociéndolos y dotándolos de las mismas garantías de aquellos expresamente enunciados.²⁷

²⁶ Ibídem pie de página 15. Pág. 27.

²⁷ Ibídem pie de página 10. Pág. 28.

La IV Disposición Constitucional, fue incluida en nuestra Constitución de 1993, siguiendo el constitucionalismo americano, que por primera vez se hizo presente en 1991 en Colombia, observándose en la redacción, la influencia de la Constitución Española en su artículo 10º: *“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados y acuerdos constitucionales, sobre las mismas materias ratificadas por España”*.

Ahora bien, esta disposición de la que echamos mano para entrar en el tema central de la investigación, para empezar debemos interpretarla conforme al artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la cual no solo ratifica que el alcance de los derechos constitucionales resguardados a través de las figuras que se hallan regulados en el Código, deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de DD.HH. y tratados en esta materia, sino también de conformidad con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales establecidos según tratados de los que el Perú es parte.

La prevalencia de los tratados de DD.HH. sobre el derecho nacional en caso de conflicto, proviene de la obligación internacional que el Estado, en este caso peruano, adquirió al momento de suscribir y ratificar en forma libre y soberana dichos tratados, los cuales han sido ratificados por la jurisprudencia nacional. Es así que la IV Disposición de la Constitución actual, ofrece un criterio de interpretación del contenido de los derechos fundamentales, en base a ello, el contenido y la tutela de los derechos se interpretan no solo a la luz de la Constitución, y la jurisprudencia, sino también tomando en cuenta los tratados y la jurisprudencia e informes de los organismos internacionales encargados de velar por su cumplimiento, pues estas fuentes internacionales han sido reforzadas durante la historia, por las luchas y movimiento desarrollados alrededor del mundo. Esto además permitirá que en caso de que los medios jurídicos internos de reparación de los derechos no existan, se hayan agotado sin tener éxito o no

sean efectivos tales medios, la protección de los derechos puede hacerse a través de los mecanismos internacionales, a fin de verificar la conformidad con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.²⁸ En esa línea, luego de ratificar un tratado, las primeras obligaciones del estado será poner en marcha un plan para asegurarse que las normas internacionales operen dentro de su jurisdicción, lográndose así, incorporarlas al marco normativo interno y evaluando la legislación con el propósito de eliminar las discrepancias que pudieran existir entre ellas de manera que puedan adecuarse y complementarse una con otra.

²⁸ (Carbonel, Primera edición, diciembre del 2002)

PARTE II: DERECHO NO ENUMERADO DE LOS EXTRANJEROS A NO SER EXPULSADOS DEL PERÚ COLECTIVAMENTE.

Empezamos el tema central indicando que “la jurisprudencia regional de los sistemas interamericano y europeo ponen reiterado énfasis en lo que se refiere a la discriminación y a la distinción, de tal forma que los tratos que se consideran prohibidos son los discriminatorios por no responder a motivos objetivos, ni razonables, en tanto que las distinciones se encuentran autorizadas siempre y cuando respondan a una justificación razonable, en cuyo supuesto la distinción no se considera arbitraria ni constitutiva de discriminación. De tal modo que esos aspectos quedarán remitidos a lo que en forma soberana cada Estado desee incluir en su política migratoria”.²⁹

Es facultad de un Estado, expulsar a un extranjero de territorio nacional, enmarcándose dentro de las prerrogativas que le concede su soberanía, sin embargo, esta no puede depender del mero arbitrio de quien la decreta, sino que debe obedecer a una de las causales de expulsión determinadas con anterioridad por la legislación nacional, y además someterse en su tramitación al debido proceso. No obstante, aun cuando se cumplan dichos requisitos debe atenderse a las limitaciones que establece el derecho internacional para decretar esta medida, entre las cuales se encuentra la prohibición de efectuar expulsiones colectivas.

El texto denominado “El artículo 33° de la Constitución y la expulsión de personas extranjeras”³⁰ muestra que en el plano internacional, que la cuestión de expulsión de extranjeros procede propiamente de lo establecido en el artículo 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de lo previsto en el párrafo 6 del artículo 22° de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto en el marco regional, sin embargo

²⁹ (PALACIOS SANABRIA, 2013).

³⁰ (DE DIENHEIM BARRIGUETE, 2013).

la Unión Europea, como veremos posteriormente, se encuentra un paso delante de nuestro sistema, pues tiene un Protocolo específico que delimita los lineamientos a tener en cuenta cuando se enfrentan a un caso de expulsión colectiva. Un punto a nuestro favor es que en el 56° Período de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidió incluir la “Expulsión de extranjero” en su programa de trabajo y nombrar Relator Especial al Sr. Maurice Kamto. La Asamblea General en el párrafo 5 de la resolución 59/41 de fecha 2 de diciembre del 2004, aprobó la decisión de la Comisión de incluir el tema en su programa.

1. ANTECEDENTES.

Anteriormente, la doctrina era uniforme al considerar que los Estados que realizaban expulsiones, solo ejercían sus facultades contenidas en el derecho internacional, esto a consecuencia de las anexiones y separaciones de territorios previstas en los tratados de paz que pusieron fin a la I Guerra Mundial y que motivaron que se ejercieran con frecuencia el derecho de expulsión.

Es en ese sentido, que las expulsiones en masa, involucraban la salida forzosa de ciudadanos extranjeros del territorio nacional, con las consecuencias propias de la expulsión en sentido general, podemos decir que esta práctica es un fenómeno reciente, diferente del pasado puesto que antes ha estado estrechamente vinculada a las situaciones de conflicto armado de la grave crisis entre estados, aplicándose tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra; así Estados Unidos ha practicado expulsiones colectivas desde el siglo XIX. En Europa existen casos de expulsión colectiva que se remontan al siglo XVII, al margen de las políticas gubernamentales, dichas expulsiones no suscitaron ninguna oposición basada en el derecho internacional, es decir que en aquella época, las

expulsiones colectivas de extranjeros, incluso e tiempos de paz, no estaba prohibida.³¹

1.1. EE.UU.

En Estados Unidos debemos destacar el caso de la “inmigración amarilla”, como peyorativamente era llamada, este gobierno, ante el flujo cada vez mayor de inmigrantes chinos, propuso el tratado del 17 de noviembre de 1880, el mismo que otorgaba el derecho a suspender o limitar la inmigración de trabajadores cuando se considere necesario para salvaguardar sus intereses. Sin embargo y si este no fuera suficiente, posteriormente consiguió que el Ministro chino en Washington firmara, el 12 de marzo de 1888 el acuerdo que prohibía la entrada a su territorio a todos los obreros de “raza amarilla” por un período de 20 años; ante la negativa del Estado Chino de ratificarlo, el 1 de octubre de 1888, EE.UU. aprobó, primero una ley que prohibía de hecho, el acceso de los trabajadores chinos al territorio de EE.UU. y posteriormente otra ley, denominada “Ley de exclusión de chinos”, que imponía condiciones muy estrictas de residencia, lo que desembocó en una expulsión colectiva por obra del estado.

1.2. EUROPA.

Debemos remontarnos para ello al siglo XVIII, así en España existió una ley (año 1703) que vulneraba formalmente los principios del derecho de gentes de la época, que ordenaba la expulsión en masa de todos los súbditos ingleses y holandeses que no fueran católicos. En Rusia hubo una ley en 1793, dada por el Emperador Pablo I, quien ordenó que los franceses residentes en Rusia renunciaran a las doctrinas ateas, bajo pena de expulsión.

Yendo a un periodo más reciente, en el siglo XX, a raíz de los problemas entre Polonia y Alemania originados por la delimitación de las

³¹ (MARTINEZ PEREZ, Volumen I - Número 9, mayo 2013).

fronteras entre ambos países con arreglo al Tratado de Versalles, Alemania expulsó en masa a 25.000 obreros polacos establecidos en su territorio, a finales de 1922, a su vez, Polonia expulsó a un gran número de alemanes en abril de 1923.

2. SOBERANÍA.

La soberanía alcanzó contenido a partir de la Revolución Francesa que dio base al desarrollo de los Estados nacionales, pues se suprimió la subordinación del siervo que fue reemplazado por la calidad de ciudadano, quienes mediante participación directa o a través de representantes concurrían en la formación de leyes; alcanzando su máximo contenido en la primera parte del siglo XX, con la II Guerra Mundial, pues aquí se da fin a la soberanía externa ilimitada.

Se hace necesario dar algunos alcances acerca de la Soberanía, pues ella es considerada como requisito límite en la expulsión de extranjeros. La soberanía es un derecho nacional no individual, que corresponde a la nación como persona moral, y no a los individuos que la forman, sean una fracción grande o pequeña, siendo indivisible; los Estados entonces pueden establecer de forma soberana los condicionamientos para que los extranjeros puedan entrar a sus territorios y ello deberán hacerlo conforme a las normas internacionales, que establecen limitaciones, por ejemplo la prohibición de tortura y el respeto de la vida familiar, esto reconocido en el artículo 11° de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 17° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por ende el goce de los diversos derechos, está íntimamente vinculado con la aplicación de la no discriminación, además que los estados se encuentran obligados no solamente a ejecutar medidas de protección a los considerados más vulnerables, como son los niños, si no también debe favorecer la integración del núcleo familiar. Es en ese sentido que consideramos a la familia como un elemento fundamental de la sociedad, siendo protegido de forma directa

y efectiva por el estado, erigiéndose como un principio rector del derecho internacional.

Podemos afirmar entonces como derecho inherente a la soberanía del estado, que el derecho de expulsión se enfrente a ciertos límites que constituyen principios fundamentales que integran el núcleo del sistema jurídico internacional. Del mismo modo, debemos distinguir entre los límites que son inherentes al ordenamiento jurídico internacional, en la medida que forman parte de los requisitos de cuyo cumplimiento depende la existencia de dicho ordenamiento, y los límites derivados de ámbitos específicos del derecho internacional, que forman parte de los requisitos para ejercer el derecho de expulsión, con la clara prohibición del abuso de derecho y con el principio rector de buena fe, la interdicción de adoptar medidas arbitrarias, y el trato mínimo debido a los extranjeros. Es muy usado el término de “discrecionalidad” cuando se hace referencia a la soberanía estatal, la misma que generalmente va acompañada de la idea de que tal facultad no es total y tampoco deberá ser interpretada de forma arbitraria.

Ahora, es necesario desde la otra cara de la moneda, hacer una precisión, como puso de relieve Rolin-Jacquemyns, citado por Odette Martínez Pérez³², (MARTINEZ PEREZ, Volumen I - Número 9, mayo 2013), esa soberanía puede peligrar si personas que no tienen “ningún vínculo político con el Estado en el que entran(...) dicho de otro modo, cuya patria es otra, pudieran penetrar en el territorio, instalarse en él y desafiar a las autoridades locales que hubieran estimado dicha estancia peligrosa o perjudicial para el país”, de lo que concluimos que la no expulsión masiva de un territorio, no es un derecho absoluto, en tanto se respeten los lineamientos y se haga uso de un debido proceso. El derecho de un estado de expulsar de manera discrecional a los extranjeros cuya presencia cuya presencia considera indeseable, lo mismo que el derecho a negar las

³² Ibídem pie de página 32. Pág. 203.

admisión de extranjeros, son considerados como atributos de la soberanía estatal.

3. ÁMBITO EXTRA REGIONAL: ARTÍCULO 4 DEL PROTOCOLO N° 4.

Para el presente estudio, se consideró importante, añadir ciertas especificaciones y presiones del sistema de Derechos Humanos Europeo, siendo así, existe un artículo en el Protocolo común para todos los Estados integrantes de la Unión Europea, Protocolo Adicional N° 4 al Convenio Europeo para la Protección de los DD.HH y las Libertades Públicas (Convenio de Roma, suscrito el 4 de noviembre de 1950, entrando en vigor el 3 de setiembre de 1953), complementándose con los señalado en el Protocolo Adicional N° 747, en el cual se regulan las garantías procedimentales en un procedimiento de expulsión de extranjeros.³³ En el año 1963 cuando se redactó dicho instrumento, este constituyó el primer tratado internacional que se ocupaba de las expulsiones colectivas que no estaban expresamente incluidas en el Convención Europea de Derechos Humanos, el mismo que establece: *“Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”*.

El texto denominado “La protección de los extranjeros frente a las expulsiones colectivas y devoluciones en caliente”³⁴, nos pone de manifiesto que la principal finalidad del artículo 4 es evitar, que los Estados hicieran que determinados extranjeros tuvieran que abandonar su territorio sin que previamente se hubieran examinado sus circunstancias personales concretas, de tal modo que, estos hubieran podido expresar, en su caso, sus argumentos en contra de la medida adoptada por la autoridad competente.

Asimismo cabe resaltar, que este Protocolo, se refiere a los extranjeros, sin excluir expresamente a los inmigrantes irregulares,

³³ (Especial, 19 de abril del 2007).

³⁴ (SOLANES CORELLA, 27 de diciembre del 2017).

prohibiendo las expulsiones colectivas de todo tipo de extranjeros. El prohibir las expulsiones colectivas hace referencia a aquellos individuos de los que no se individualizan las características, ni la situación particular, ni el riesgo alegado por cada una de las personas que conforman el grupo.³⁵

Debemos acotar que un acuerdo equivalente al retorno en bloque de individuos de un país, a un tercer país, transgrediría este Protocolo y no estaría acorde a la legislación internacional, esto se esbozó en el marco del acuerdo sobre refugiados de la Unión Europea y Turquía.³⁶

Asimismo cabe precisar que el artículo 4° del Protocolo Adicional mencionado del CEDH, debe ser complementado con lo establecido en el Protocolo Adicional N° 7, que regula las garantías del procedimiento en caso de expulsión de extranjeros (artículo 1°). Entre las garantías que amparan a estos inmigrantes, se encuentran, “*que su expulsión no podrá ser sino en ejecución de una resolución dictada conforme a ley y deberá permitírsele, a) exponer las razones que se opongan a su expulsión; b) hacer examinar su caso y; c) hacerse representar a tales fines ante la autoridad competente o la persona o personas designadas por esa autoridad*”.

En ese mismo sentido, se expresa la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en su artículo 12° párrafo 5, “***Está prohibida la expulsión en masa de extranjeros. Por expulsión se entiende la que engloba a grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos***”.

Este último párrafo, sin embargo contiene una disposición que puede interpretarse de forma restrictiva, puesto que una expulsión colectiva puede afectar a un grupo de personas que no esté dentro de lo ya enumerado.³⁷

4. LA EXPLUSIÓN DE EXTRANJEROS EN EL PERÚ.

³⁵ (Apuntes sobre jurisprudencia del TEDH en materia de expulsiones colectivas: el artículo 4 del Protocolo 4 al Convenio, 2015).

³⁶ (La ONU advierte a la UE de que la "expulsión colectiva" está prohibida, 2016).

³⁷ Ibídem pie de página 35. Pág. 22.

El derecho de expulsión con el que cuentan los Estados, como ya se ha dicho, debe ser ejercitado en los límites de su función y propósito, y que está sometido al requerimiento de justificación, aunque el Estado goce de un cierto margen de apreciación al respecto.³⁸

Es así que se entiende por “expulsión”, a un comportamiento atribuible al estado, mediante el cual un extranjero es compelido a abandonar el territorio de ese estado; esto no incluye la extradición o la entrega a una jurisdicción penal internacional, ni la admisión de un extranjero en un estado. Ahora, por “extranjero”, hacemos referencia a la persona física que no tiene nacionalidad del estado en cuyo territorio se encuentra.³⁹

La CIDH ha reconocido una facultad a los Estados de tratar de forma diferenciada a los migrantes que se encuentran documentados de los indocumentados o entre los migrantes y los nacionales, siempre que este trato sea objetivo y fuere de forma proporcional, además de no violentar los derechos.

Un punto interesante para acotar, es que en tiempo de guerra, la norma internacional tampoco promueve a que se practique la expulsión colectiva, pues no existe norma al respecto, sin embargo los Estados tienen una práctica inestable, sin embargo ha de comprenderse que la expulsión de extranjeros que se encuentren en territorio “enemigo” solo debe realizarse si estos presentan una actitud hostil.

Se puede considerar que existen dos motivos de expulsión (orden público y seguridad pública), los cuales se aplican a todos los extranjeros que se hallen legalmente en el territorio del estado autor de la expulsión y que la violación de la legislación relativa a la entrada y residencia de extranjeros puede ser motivo suficiente de expulsión de los extranjeros que se encuentren ilegalmente en el territorio del estado, ello sin perjuicio de la protección que ofrecen ciertas leyes nacionales a ciertas categorías de

³⁸ (La expulsión de extranjeros en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , 2016).

³⁹ Ibídem pie de página 31. Pág. 200.

extranjeros en situación irregular, en función de consideraciones variables, como se verá más adelante, según los Estados.

4.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APLICABLES.

De acuerdo a lo que se ha venido exponiendo, en el Perú, este derecho no se encuentra enumerado en nuestra Constitución, por lo que supondría un peligro el no tener parámetros establecidos que permitan realizar una correcta valoración de la situación mediante un debido proceso y así llegar a tomar una decisión que no vulnere derechos humanos, es por ello que se hace imprescindible que nos dirijamos a instrumentos internacionales, teniendo como salida la IV Disposición Final Constitucional, y así podamos examinar Tratados Internacionales relativos a este tema, así como hacer precisiones, de acuerdo a lo analizado en los instrumentos Constitucionales no regionales; siendo así en el Perú, es aplicable la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familia (1990), ratificada por el Perú, el 31 de octubre del año 2013, específicamente en su artículo 22° inciso 1: ***“Los trabajadores migratorios y sus familia no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso será examinado y decidido individualmente”.***

Asimismo es importante interpretar este artículo en concordancia con los incisos siguientes de este artículo pues no darán una guía de procedimiento y requisitos que pueden aplicar en el caso peruano estando ante este derecho implícito en la Constitución, los mismos que aplican principios como no discriminación y unidad familiar.

Además es importante señalar el artículo 22° inciso 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues también nombra de manera taxativa el derecho tratado, sin embargo, hay que analizar su contenido a partir de lo expuesto por el artículo 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 22.9 de la Convención Americana de DD.HH: *“Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”.*

Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: *“El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en el presente Pacto solo podrá ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a ley; y a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ellos, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas”.*

Según este último artículo, los Estados deben guiarse por determinadas reglas que les permitan realizar una correcta expulsión individual de extranjeros; en lo que compete a la presente investigación, se puede inferir que solo se regula la expulsión individual, prohibiéndose la colectiva, interpretándose de esas manera cuando se hace referencia a que las expulsiones no se llevarán de forma arbitraria y además que las decisiones adoptadas se tendrán en cuenta a cada caso en particular. Para dilucidar mejor el tema, debo traer al centro que el Comité de Derechos Humanos, ha determinada que el artículo 13°, dota a cada extranjero el derecho, que en cada caso se adopte una decisión singular, siendo así, podemos deducir que no se ha autorizado leyes que permitan expulsiones en masa; no pudiendo ni siquiera invocar al orden público para reducir la garantía de los administrados, ello además sin tener en cuenta el debido proceso.

Los Estados garantizarán las no expulsiones colectivas, cuando se presente el caso de que no se cuenten con las garantías suficientes, al no haberse tenido en cuenta las circunstancias personales, en cada fase que requiere el ordenamiento peruano, que va desde la convocatoria de los interesados hasta su respectiva sanción, además de que se tenga certeza que el procedimiento seguido ofreció garantías suficientes que atestiguaran una consideración real y diferenciada de la situación individual de cada inmigrante afectado.⁴⁰

4.2. EXTRANJEROS EN EL PERÚ.

Actualmente la inmigración se ha convertido en una cuestión de perspectiva internacional, global, que debe optar por respuestas coordinadas, a gran escala, ya no solo de carácter regional, sino mundial, borrando o haciendo más factible, los trámites engorrosos que no permitan una rápida actuación, haciéndose indispensable un “lenguaje común”, para la cooperación tenga éxito efectivo.

Si bien es cierto, como se ha venido mencionando, los Estados cuentan con facultades que les ha permitido restringir contados derechos a los extranjeros, el cual se hace efectivo a través de las estructuras de su política migratoria, la misma que comprende aspectos de admisión y permanencia en suelo peruano, en mi opinión el Perú no cuenta con una política que logre el equilibrio entre los extranjeros que ingresan y los ciudadanos peruanos, pues al estar en vías de desarrollo y al no poder controlar la ola migratoria, puede ocasionar un desbalance, además de crisis laborales hacia los ciudadanos, sin embargo, ese tema no será abordado, si no que analizaremos la situación, que como Estado debemos afrontar de la mejor manera, los derechos de extranjeros que no cuentan con protección expresa y pueden ser objeto de violaciones.

⁴⁰ (PALACIOS SANABRIA, 2013). Págs. 13-15

En el Perú en materia de inmigración, contamos con el Decreto Legislativo N°1350 y su reglamento, que fue aprobado por Decreto Supremo N° 007-2017, es así que Migraciones promueve todo lo concerniente a tutelar la dignidad y los derechos fundamentales de los extranjeros, especialmente los que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

La presencia de situaciones de desigualdad obliga al estado a tomar medidas de equilibrio que contribuyan a reducir o eliminar obstáculos y deficiencias que impidan o incluso reduzcan la defensa eficaz de los intereses de migrantes, pues si estos no existen, no podemos hablar de un real acceso a la justicia mediante un debido proceso en igualdad de armas.

4.3. MARCO JURÍDICO NACIONAL.

En este apartado haremos referencia a los mecanismos que rigen al Estado Peruano en su política migratoria, así el texto “Situación de los migrantes extranjeros en el Perú y su acceso a servicios sociales, servicios de salud y educación”, nos hace conducir hacia la Ley de Nacionalidad y la Ley de Migraciones, las mismas que observan los lineamientos a seguir en caso de una expulsión individual, pues esto ayudará cuando se presente un caso de expulsión colectiva de extranjeros, debiendo seguirse los mismos lineamientos, pero con salvaguarda de los requisitos propios e inherentes a la expulsión “en masa”. Los procedimientos de expulsión están sometidos a una serie de límites sustantivos y procesales que giran en torno a la protección de la persona y su dignidad.

La ley de Nacionalidad, Ley N° 26574 y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 004-97, regula los requisitos para la adquisición de la nacionalidad peruana por nacimiento y naturalización.

La ley de migraciones N°1350 y su reglamento, publicada el 7 de enero, entrando en vigencia el 1 de marzo del 2017, tiene el objetivo de simplificar y ordenar la legislación migratoria, protegiendo los derechos de los ciudadanos nacionales y extranjeros, contribuyendo al fortalecimiento

de la seguridad nacional, proponiendo como punto a diferencia de su predecesora, que el extranjero que incurra en causal de expulsión, debe abandonar el territorio nacional con impedimento de reingreso hasta por un plazo de quince años. En el caso específico de la formalización y ejecución de las sanciones migratorias, el artículo 64 de la citada norma, señala que estas se formalizan mediante resolución administrativa expedida por MIGRACIONES, en función de la unidad familiar e interés superior del niño. Siendo así, el procedimiento sancionador inicia con la notificación al presunto infractor del Informe Policial y culmina con la notificación de la resolución que impone la sanción o desestima los cargos. El procedimiento sancionador cuenta con dos fases, la primera, llama instructiva comprende las actuaciones que nos lleven a determinar la responsabilidad administrativa, iniciándose con la notificación al presunto infractor, el plazo para que este pueda hacer los descargos es de 5 días hábiles, que pueden ser prorrogables; vencido este, aun si no ha expuesto sus argumentos, se analizarán las pruebas que lleven a dar con la responsabilidad del presunto infractor. Esta fase culmina con el pronunciamiento, mediante el informe que contiene la existencia o no de la falta imputada, recomendando en el primer caso la sanción impuesta. La fase sancionadora propiamente dicha inicia con la recepción del informe, hasta la emisión de la resolución que dispone la sanción o desestima los cargos, en este caso se archivará el procedimiento; esta resolución también se notificará al interesado; en caso se disponga la aplicación de las sanciones de salida obligatoria o expulsión, esta deberá ir acompañada de una orden de salida conteniendo el plazo para su cumplimiento; asimismo contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de quince días hábiles.

5. REQUISITOS PARA CONSIDERARE UNA EXPULSION COLECTIVA.

Las expulsiones colectivas o como son llamadas en la jurisprudencia europea, “en masa” fueron debatidas por la Asociación de Derecho Internacional en su 62º Conferencia celebrada en Seúl en el mes de agosto de 1986, la cual contiene 20 principios, sin embargo al tema que nos interesa, pertenecen los principios 17 y 18, los cuales declaran que no debe aplicarse de manera arbitraria la expulsión, la misma que debe utilizarse conforme a los principios de buena fe, proporcionalidad y justicia, con observancia de los derechos fundamentales.

Debemos como siempre tener en cuenta el concepto de algunos términos para facilitar el entendimiento de la investigación, es por ello que debemos definir a la expulsión colectiva; la Comisión Europea de DD.HH. ha dado una definición al examinar la demanda interpuesta contra un proyecto del gobierno danés de repatriar a 199 niños vietnamitas acogidos en Dinamarca, entendiendo por expulsión colectiva, “cualquier medida de la autoridad competente que obligue a los extranjeros, como grupo, a abandonar un país, salvo que tal medida se adopte al término y sobre la base de un examen razonable y objetivo de la situación concreta de cada uno de los extranjeros que integran el grupo”.⁴¹

En principio para que una expulsión sea colectiva no sólo se requiere que se expulse a más de una persona a la vez, sino que se hace necesario que además no se haya efectuado un examen individual y objetivo de la situación particular de cada una de las personas que integre el grupo⁴², despersonalizando de esa forma al individuo. En efecto, el hecho de que las decisiones de expulsión estén redactadas idénticamente no basta para considerarse como expulsión colectiva, con arreglo a los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes, si cada una de ellas ha ido precedida por un examen concreto a la situación particular de cada afectado.⁴³ La idea del examen individual de la situación, de cada miembro de un grupo de

⁴¹ (Especial, 19 de abril del 2007). Fundamento 134. Pág. 26. Fundamento 107. Pág. 22.

⁴² Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Becker v. Dinamarca y Andric vs. Suecia.

⁴³ (Especial, 19 de abril del 2007) Fundamento 101. Fundamentos 109-110. Pág. 22

personas sujetos de una expulsión, teniéndolo como antecedente a los acontecimientos modernos, se dio a principios del siglo XX, en Francia cuando el gobierno de ese país, decidió hacer uso de su derecho de expulsión contra 500 alemanes después de la I Guerra Mundial, el 12 de agosto de 1922. Actualmente varios Estados practican las expulsiones colectivas, siendo los infractores, incluso estados vinculados por instrumentos jurídicos que prohíben tales expulsiones, África o América Central.⁴⁴

6. LA EXPULSIÓN COLECTIVA COMO INFRACCIÓN DEL DEBIDO PROCESO.

De lo que hemos analizado es necesario dejar de manifiesto que la expulsión de un extranjero de un determinado territorio debe someterse a un procedimiento establecido debidamente en la ley y en el cual se respete el principio del debido proceso, con todos los derechos que ello conlleva; caso contrario nos encontraríamos ante manifestación fáctica de que no se respetaron las garantías del extranjero, toda vez que uno de los elementos para configurar dicha figura es que no se haya efectuado un examen individual, objetivo y razonable de la situación del extranjero en forma previa al decreto de expulsión, lo que da cuenta de que no hubo un procedimiento propiamente tal de expulsión que se ajustara al debido proceso. Este derecho procesal es de origen anglosajón, el cual está considerado como un derecho humano, siendo definido como “el conjunto de medidas, seguridades, o garantías que se ofrecen a la persona que sea procesada o juzgada, a fin de que lo sea con legalidad, imparcialidad, sea oída públicamente y con justicia”.⁴⁵

La Comisión Interamericana de DD.HH, en el caso de las expulsiones colectivas de migrantes colombianos realizadas en forma constante por Venezuela en el estado de Tachira, señaló en un comunicado

⁴⁴ (Especial, 19 de abril del 2007). Fundamentos 114-115. Pág. 23.

⁴⁵ Ibídem. Ortecho Villena. Pág. 61.

de prensa, el 28 de agosto de 2015 que el gobierno de Venezuela debía detener de manera inmediata cualquier expulsión colectiva y arbitraria, además que debería adoptar de forma urgente todas las medidas necesarias con el fin de garantizar que los migrantes incluso en situación de irregular, tenga acceso a un procedimiento que cumpla con las garantías del debido proceso antes de que sean deportados y que se proteja la unidad familiar,⁴⁶ que tiene por finalidad orientar la actuación del Estado en el procedimiento migratorio sancionador.

La Constitución peruana tiene previsto al debido proceso en su artículo 139°, es por ello que el máximo intérprete de la Constitución señala que este derecho, “se manifiesta en el caso que no se cumplan normas de procedimiento o instituciones procesales estrictamente de nivel constitucional o mediante el incumplimiento o aplicación de ciertas leyes que afectan el derecho procesal constitucional adecuado.”⁴⁷

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomienda a los Estados “abstenerse de que (...) los no ciudadanos no sean devueltos o trasladados a un país o territorio en el que corran el riesgo de ser sometidos a abusos graves de los derechos humanos, como tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”⁴⁸ incluso contra extranjeros que se encuentran en situación de irregulares, es decir no cuenta con los requisitos para entrar y permanecer en el país, esto según lo dicho por la misma Corte Interamericana (Corte IDH, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2010. Serie C-218, pár. 198), pues primará la dignidad humana.

La expulsión de los migrantes se incluye dentro de procedimientos administrativos sancionatorios, por lo que también cabe aplicarse las garantías del debido proceso, el artículo 8° de la Convención Americana, no limita su aplicación solo al ámbito judicial, sino que el valor protegido se

⁴⁶ (TC Expediente N° 02744-2015-PA/TC, F.J. 32).

⁴⁷ (Sentencia 568-1996-HC/TC. Fundamento Jurídico 2).

⁴⁸ (Comité para la eliminación de la discriminación racial. Recomendación General XXX. Pár. 27)

extiende a lo civil, laboral o de cualquier otro carácter, los cuales tienen como límite insalvable, el respeto de los DD.HH. siendo que cualquier acto u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea cual sea su naturaleza, debe respetar el debido proceso legal.

Sobre la igualdad material, queda claro que las dificultades a las que se enfrenta un extranjero en un gobierno diferente, justifica una mayor protección para lograr una igualdad efectiva; es así que debemos tomar en cuenta que no solo se enfrentan a muros lingüísticos o informativos, sino que también pueden enfrentarse a barreras conceptuales y culturales, razón por la que debemos tener en cuenta la idiosincrasia para considerar que un extranjero está consciente de lo sucedido a su alrededor, siendo así, la asistencia consular se vuelve mucho más importante, pues el cónsul pues el cónsul tiene la capacidad de adaptar culturalmente la información proveída al ciudadano extranjero.

7. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL.

En este punto, analizaremos las principales jurisprudencias que conciernen a nuestra investigación y que son importantes porque dotan de precisión al derecho de los inmigrantes a no ser expulsados de un territorio de forma colectiva, en un Estado como el nuestro, en donde no es un derecho regulado implícitamente en la Constitución, conforme al movimiento social y cultural que ha tenido lugar en el Perú durante los últimos años.

7.1. Caso Becker vs. Dinamarca.

HECHOS: Este caso trata de la expulsión de 119 niños huérfanos vietnamitas de territorio danés, que habían llegado a dicho país huyendo de la guerra civil en el marco de las persecuciones de que habían sido víctimas por el Frente de Liberación del Vietnam.

FALLO: A raíz de ello, la Comisión Europea de DD.HH. introdujo la idea de grupo como elemento definitorio del concepto de expulsión

colectiva, alegando que en dicho caso Dinamarca estaba violando el Art. 4 del protocolo N° 4 de la CEDH, mientras que el gobierno argumentó que el concepto de expulsión era distinto del de repatriación conforme al Art. 24 de la cuarta Convención de Génova. El 3 de octubre de 1975 se dio lugar al fallo de este caso, y su importancia radicó en que otorgó un primer acercamiento del concepto de expulsión colectiva, al señalar que estaríamos ante una expulsión colectiva cuando la autoridad competente compela a un conjunto de extranjeros, como grupo, a abandonar el país, salvo cuando se demuestre que se decretó esta medida después de un examen razonable y objetivo de la situación individual de cada extranjero. El tribunal finalmente rechazó la solicitud, lo que permitió que exista un examen individual de la situación de cada niño vietnamita.

7.2. Caso Andric vs. Suecia.

HECHOS: Las expulsiones de un grupo de croatas provenientes de Bosnia, de Suecia, entre ellos a Vedran Andric, quien acudió ante el Tribunal Europeo, alegando que se habían efectuado expulsiones de carácter colectivo, en tanto las autoridades de dicho país no habrían examinado individualmente la situación de las personas de ese grupo antes de expulsarlas. Así, en forma particular, el demandante alegó que de ser deportado a Bosnia corría riesgo de ser condenado a 20 años de prisión por negarse a portar armas en un incidente ocurrido en 1992, cuando trabajando como policía se negó a unirse a las fuerzas musulmanas, y que de ser deportado a Croacia era altamente probable que fuese devuelto a Bosnia-Herzegovina nuevamente, siendo en consecuencia dicho país incapaz de otorgarle protección.

FALLO: El caso fue conocido por dicho tribunal, y el fallo se dio el 23 de febrero de 1999, y marcó un precedente en la materia en tanto se explicitó en su primer párrafo los supuestos que deben cumplirse para estar ante una expulsión colectiva. Para el mencionado tribunal una expulsión es colectiva cuando se obliga a un grupo de extranjeros a salir de un

determinado país, a excepción de cuando dicha medida se tomó considerando las circunstancias personales de cada persona que conformaban el grupo, a base d un examen razonable y objetivo de su situación personal. Por otra parte, agrega el tribunal que el hecho de que varios extranjeros reciban decretos de expulsión basados en consideraciones similares no importa, necesariamente, que dichas expulsiones sean colectivas, siempre y cuando se les dé la oportunidad de exponer sus argumentos de forma individualizada ante las autoridades competentes. Finalmente el tribunal consideró que en el caso no hubo una expulsión colectiva por parte del gobierno sueco, toda vez que para decretar dichas órdenes tuvo en especial consideración el peligro que corría dicho grupo de personas al ser devueltos a Bosnia- Herzegovina, y analizó por tanto la posibilidad de devolverlos a Croacia, y que dicho país les otorgase protección. De esa forma, para el tribunal el gobierno sueco tuvo en consideración las circunstancias personales a la hora de decretar la expulsión, no obedeciendo ésta, en consecuencia, a razones grupales.

7.3. Caso Čonka v. Bélgica.

HECHOS: Este caso se inició con la demanda interpuesta por la familia Čonka (eslovaca de origen zíngaro), en contra de Bélgica, luego de que dicho país rechazara su solicitud de asilo por falta de prueba del alegado peligro al que se verían expuestos en Eslovaquia, por la cantidad de ataques de skinheads que habrían sufrido con anterioridad, decretando en forma posterior su expulsión del país. Así, luego de haberse interpuesto recursos en contra de dicha decisión de expulsión, finalmente en septiembre de 1999 se citó a varias decenas de familias zíngaras eslovacas, entre ellas los demandantes, haciéndoles entrega en esa oportunidad de una nueva orden de expulsión (idéntica para todos) que iba aparejada a la resolución de ser devueltos a frontera eslovaca, y su privación de libertad en el tiempo intermedio.

FALLO: El fallo se dio con fecha 5 de febrero de 2002, y entre sus considerandos más relevantes encontramos el párrafo 59, el cual establece que las circunstancias en las que se decreta una orden de expulsión también deben considerarse a la hora de determinar si esta fue colectiva, no debiendo, en consecuencia, restringir su calificación meramente al número de expulsados simultáneamente y la no consideración de las circunstancias personales de forma objetiva y racional. En ese sentido, el tribunal falló en contra de Bélgica al considerar que el hecho de que 1) previamente a las órdenes de expulsión y salida de los demandantes, las autoridades políticas belgas habían anunciado la realización futura de operaciones de expulsión, dando incluso instrucciones a las entidades competentes sobre su implementación; 2) todos los extranjeros expulsados fueron notificados para comparecer en la Comisaría de Ghent en el mismo día y hora; 3) las órdenes de expulsión y detención han sido redactadas en términos idénticos para todos ellos; 4) la dificultad de los demandantes, y demás expulsados, en contactar un abogado y 5) el procedimiento de solicitud de asilo no estaba aún finalizado. El gobierno belga no tuvo en consideración las circunstancias personales de cada una de dichas personas a la hora de decretar su expulsión, incumpliendo el Art. 4 del protocolo N° 4 de la CEDH. De esta forma, la importancia de este fallo radica en que a propósito de su conocimiento por el TEDH, se añadió un nuevo criterio para la determinación de una expulsión colectiva, que permitió “la detección de expulsiones colectivas de extranjeros encubiertas”, esto es, expulsiones que a pesar de tener apariencia de juridicidad en la práctica denotan una intencionalidad de expulsar a un extranjero sin efectuar un control previo, razonable y de su situación individual.

7.4. Hirsi Jamaa y otros vs. Italia.

HECHOS: Los hechos que dieron origen a esta causa se enmarcan en la interceptación de 3 buques provenientes de Libia por la policía italiana, cuando se encontraban aun navegando en aguas internacionales y la

posterior devolución de las personas que se encontraban en esas embarcaciones a territorio libio, en buques militares italianos. En ese contexto, surge la disputa jurídica de si aplica la institución de la expulsión colectiva de forma extraterritorial, alegando Italia que sólo se podría hacer valer en el caso de personas que se encuentren en un territorio determinado, y el TEDH por otra parte que el protocolo N° 4 de la CEDH no contiene ninguna referencia al “territorio”, y que en consecuencia no habría obstáculo para ampliar su aplicación al plano extraterritorial.

FALLO: De fecha 23 de febrero de 2012, se dijo a grandes rasgos que si la institución de la expulsión colectiva no aplicara en el ámbito extraterritorial no se protegería plenamente a los extranjeros, y en consecuencia se incumpliría el propósito que tuvo la dictación del Art. 4 del protocolo N° 4. Teniendo en consideración aquello, del párrafo 177 de la sentencia se extrae que si el referido Art. 4 no aplicase de forma extraterritorial perdería eficacia práctica respecto a una gran cantidad de patrones migratorios, lo que llevaría al absurdo de que tales extranjeros no tuvieran derecho a un examen individualizado de su situación en el tercer país, pues antes de llegar a éste se le expulsaría. Asimismo se determinó que los extranjeros fueron devueltos a Libia sin haberse respetado por las autoridades policiales italianas sus garantías individuales, pues no existió ningún examen individual previo, razonable y objetivo, concluyendo así, en su párrafo 186 que las expulsiones analizadas fueron colectivas, y en consecuencia vulneraron el Art. 4 del protocolo N° 4 de la CEDH. Es importante destacar que esta sentencia precisó el ámbito de aplicación de la expulsión colectiva, interpretando en forma amplia que rige no sólo en el plano territorial, sino que también en el extraterritorial.

PARTE III: MECANISMOS CONSTITUCIONALES FRENTE A LA VULNERACIÓN DE ESTE DERECHO.

De la Constitución peruana se observa que tanto la acción de amparo como el hábeas corpus (que nos competen en la investigación), proceden ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace algún derecho constitucional; teniendo una finalidad restitutoria.

Desde el punto de vista ya analizado, los derechos fundamentales no enumerados reconocidos a través de la IV Disposición Constitucional, como es el caso del derecho de no expulsión colectiva o en “masa” de extranjeros, deberán ser tutelados con la misma dedicación que los derechos escritos, por lo que haremos uso de los mecanismos constitucionales para su protección.

Empezando por el derecho internacional y trayendo a colación la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 8°, se hace mención al debido proceso con el que debe operar todo Estado, en la medida en que hace mención al conjunto de requisitos que deben cumplirse en las instancias procesales para que una persona pueda defenderse debidamente en juicio.

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos

5. *El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.*

Artículo 25. Protección Judicial: *Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.*

En este capítulo no trataremos lo que concierne a actividad procesal, pues no es nuestro objetivo central, sin embargo debo precisar la importancia de preservar mecanismos jurídicos que garanticen la eficacia real, puesto que cuando hay vulneración a un derecho fundamental, se afecta el derecho subjetivo de la persona y el conjunto de valores y bienes constitucionales. Esto justifica que nuestra Constitución haya previsto determinadas garantías a fin de salvar la supremacía jurídica de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.⁴⁹

Este tema es bastante extenso, pues no solo cabe hacer referencia al sistema de protección nacional, sino también a internacional, grosso modo, diré que en el Perú frente a una vulneración del derecho fundamental de expulsión colectiva de extranjeros, cabe aplicar dos mecanismos constitucionales, el Hábeas Corpus frente a detenciones arbitrarias y la Acción de Amparo, puesto que el proceso administrativo, podría anularse la resolución que da cumplimiento a una orden arbitraria.

La determinación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho, requiere del análisis de varios puntos, siendo necesario verificar que existe una norma dentro del derecho constitucional pertinente al caso,

⁴⁹ (Sentencia 10087-2005-PA/TC. Fundamento Jurídico 6.)

ubicada tanto en la Constitución como en los tratados de derechos humanos, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o en la jurisprudencia supranacional vinculante al Estado peruano. Asimismo será necesario establecer las normas que se desprendan válidamente de las disposiciones que reconocen derechos, de tal forma que puedan ser reconocidos para que puedan protegerse el derecho invocado, en caso se trate de un derecho no enumerado, será necesario vincular de manera interpretativa el derecho invocado en la demanda, con lo dispuesto en la cláusula constitucional que reconoce los derechos fundamentales no enumerados.⁵⁰

Es necesario que hagamos referencia a los procesos irregulares, de acuerdo a lo dicho por el Tribunal Constitucional, los actos irregulares debe tomarse en cuenta a fin de determinar la procedencia de las acciones de garantía, se ha vinculado el proceso regular de modo general con la figura del debido proceso y en general con las garantías en la administración de justicia que recoge la Constitución en su artículo 139.⁵¹

Como ya se ha dicho, el Hábeas Corpus hace frente a una afectación de la libertad por detención arbitraria, es el caso de detención se extranjeros para que sean merecedores de las sanciones reguladas en el marco jurídico de extranjería. El derecho a no ser sometido a torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes se encuentra reconocido en numerosos convenios internacionales dedicados a la protección de DD.HH.⁵²

La acción de hábeas corpus entonces, podrá emplearse cuando se de el caso de alguna detención arbitraria, pues se estaría atentando contra el derecho de circulación de los extranjeros y el derecho a la libertad personal⁵³, principalmente alguna detención irregular emanada de una

⁵⁰ *Ibíd.*, Eto Cruz. Pág. 377.

⁵¹ (CASTILLO CÓRDOVA, 2004)

⁵² Cfr. artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el artículo 5 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, además de los tratados dedicados específicamente a la proscripción de la tortura: Convenio de Naciones Unidas de 1984 y Convenio Europeo para la prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes de 1987.

⁵³ Derecho reconocido en el artículo 2° inciso 24 de la Constitución Peruana.

resolución administrativa que vulnere este derecho, en caso aún se siga dilucidando un procedimiento administrativo o uno judicial en vía contenciosa, no pudiendo ejecutarse la resolución administrativa hasta que el caso sea resuelto. Si bien la libertad personal tiene como uno de sus límites como lo señala el Tribunal Constitucional, en el expediente N° 733-2010-PHC/TC, además del artículo 25 inciso 6 del Código Procesal Constitucional, la aplicación de la ley de extranjería, también es muy cierto, que esta no será aplicable al libre arbitrio estatal, sino que deben seguirse las rutas pautadas, sin embargo esto podría ser una medida temporal, pues deberá atacarse principalmente la resolución administrativa que dio origen a la expulsión arbitraria.

La acción de amparo, es aplicable por medio del debido proceso en procedimiento administrativo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia N° 2209-20002⁵⁴, ha indicado que, “(el amparo) es una garantía que si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es aplicable en el ámbito de procedimientos administrativos”, incluyendo en tal caso el derecho de defensa, ello de conformidad con la Ley 27444, de procedimientos administrativos, IV Título Preliminar 1.2. Acá se hace necesario resaltar que uno de los contenidos del debido proceso, es la motivación de resoluciones judiciales, que conforme el Tribunal Constitucional, “el derecho al debido proceso incluye dentro de su contenido el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de procesos”⁵⁵. Asimismo la tutela jurisdiccional efectiva la entenderemos como el derecho de acudir a la justicia para la tutela de derecho y e intereses legítimos, por lo tanto, la prohibición de expulsión colectiva exige que el examen sea realizado por una autoridad con capacidad de valorar en su totalidad la argumentación ofrecida contra la expulsión, entrenado adecuadamente en los estándares de derecho nacional e internacional, y en

⁵⁴ Sentencia 2209-2002-AA/TC. Fundamento Jurídico 15.

⁵⁵ Sentencia 1289-2000-AA/TC. Fundamento jurídico 5.

posición de corroborar los elementos relevantes en caso necesario⁵⁶. Teniendo ello en cuenta, “la existencia en sí de otros procesos judiciales no será obstáculo para el inicio de un amparo, si el tránsito por dichos procesos trajera aparejado un daño grave e irreparable y claro, está siempre y cuando aparezca de modo claro y manifiesto la vulneración de cualquier derecho fundamental”⁵⁷.

Si bien podemos afirmar que la ley de MIGRACIONES contempla los supuestos de apelación contra la resolución de expulsión del país, de acuerdo con la ley del Procedimiento Administrativo General, sin embargo, no está previsto el supuesto de no expulsión colectiva, lo que podría ocasionar directamente una afectación al debido proceso, específicamente a través de fundamentación “no adecuada”, siendo así podremos ir a la vía constitucional de amparo, en caso se persista con la expulsión colectiva sin identificación de los extranjeros a expulsar y fundamentaciones respecto a la situación personal de cada uno de ellos, por tratarse de derechos fundamentales, con el argumento plus, que si se dirigen hacia un proceso judicial, podría darse el caso en que estos derechos devengan en irreparables (teniendo en cuenta el agotamiento de vías previas, podría darse un amparo alternativo, pues es posible que si impugnamos la resolución, esta sea ratificada por el superior, ampliando el plazo de indefensión del derecho vulnerado), más aun si se trata de un derecho no enumerado, el cual puede verse exento de protección al no sobrepasar sus límites.

⁵⁶ (BOLLO AROCENA)

⁵⁷ (LÓPEZ FLORES, Primera edición diciembre del 2013)

CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS.

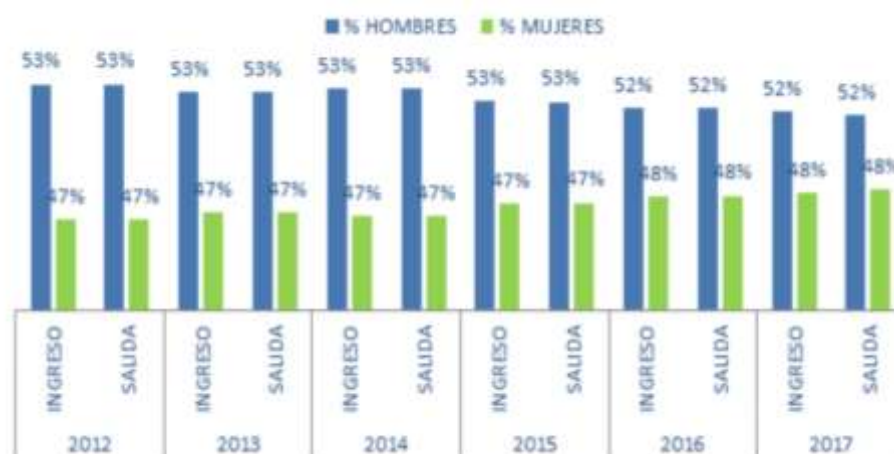
En este capítulo analizaremos el trabajo de campo para poder corroborar nuestra hipótesis inicialmente planteada.

1. LA INMIGRACIÓN EN EL PERÚ

El informe denominado “Presencia de inmigrantes en situación de vulnerabilidad en el Perú”, nos permite acceder a los registros que se dan en el Perú, evidenciándose año a año, se estima que más de 8 millones de personas extranjeras pasan por nuestras fronteras, y más del 90% ingresan como turistas; al año 2015, nuestro país registraba el 0.29% respecto a la población nacional, convirtiéndose en un país con poca inmigración en América Latina, sin embargo ha ido aumentando de manera significativa en los últimos años, sobre todo por la crisis social y económica que vive Venezuela. Además para elaborar este capítulo se ha tenido en cuenta el Informe denominado “ (Migraciones, octubre 2018)”. Según este gráfico podemos apreciar el flujo migratorio de ciudadanos extranjeros desde el 2012 al 2017:



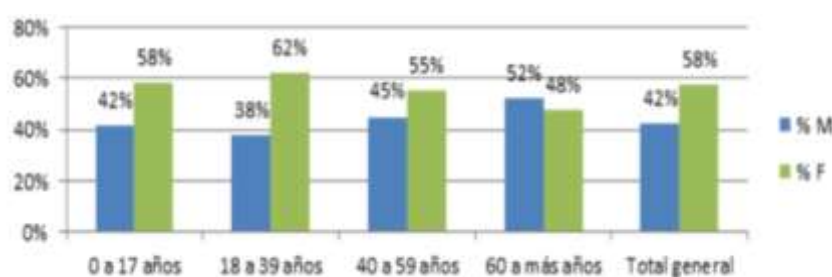
El segundo gráfico nos muestra la inmigración hacia el Perú teniendo como base el género masculino o femenino de los extranjeros, de lo que se evidencia que el número de mujeres es inferior al de varones:



Para el año 2017, esta era la cifra arrojada, teniendo en cuenta ya los países de procedencia:

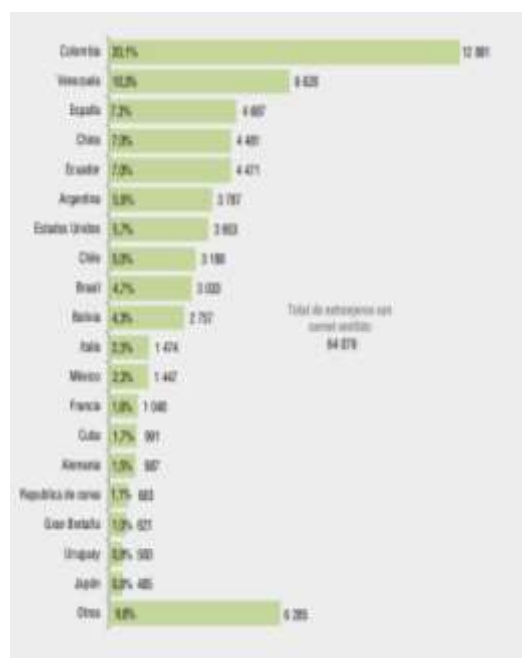
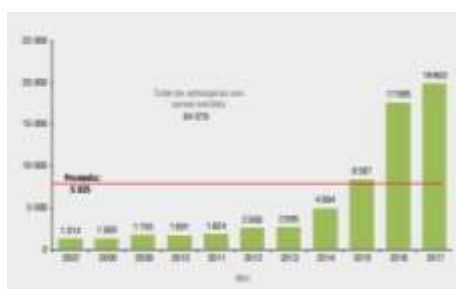
Nacionalidad	Femenino	%	Masculino	%	Total	%
Total general	1131	58%	814	42%	1945	100%
Porcentaje	58%		42%		100%	
Venezolana	576	60%	386	40%	962	49%
Española	62	47%	70	53%	132	7%
Estadounidense	57	54%	48	46%	105	5%
Colombiana	68	67%	34	33%	102	5%
Argentina	34	50%	34	50%	68	3%
Boliviana	37	69%	17	31%	54	3%
Cubana	23	43%	30	57%	53	3%
Mexicana	24	65%	13	35%	37	2%
Chilena	19	68%	9	32%	28	1%
Italiana	17	63%	10	37%	27	1%
Ecuatoriana	15	56%	12	44%	27	1%
Brasileña	20	91%	2	9%	22	1%
Dominicana	11	55%	9	45%	20	1%
Alemana	9	45%	11	55%	20	1%
Francesa	14	70%	6	30%	20	1%
Otros	145	54%	123	46%	268	14%

Ahora de acuerdo a las edades, según lo que podríamos llamar personas extranjeras dentro del grupo de vulnerabilidad:



1.1. EXTRANJEROS CON CARNET DE EXTRANJERÍA:

En 10 años el número de trámites de carnets de extranjería, aumentó a 64 mil 79 personas, en comparación al año 2007 donde se tramitaron 1 mil 314.



1.2. MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR:



1.1.3. INMIGRANTES SEGÚN SU SITUACIÓN:

Podemos afirmar que los extranjeros que iniciaron su trámite para cambiar su situación migratoria, el 80% era turista, y debemos tener en cuenta que esta situación solo puede ser temporal y con limitaciones para integrarse en el país.

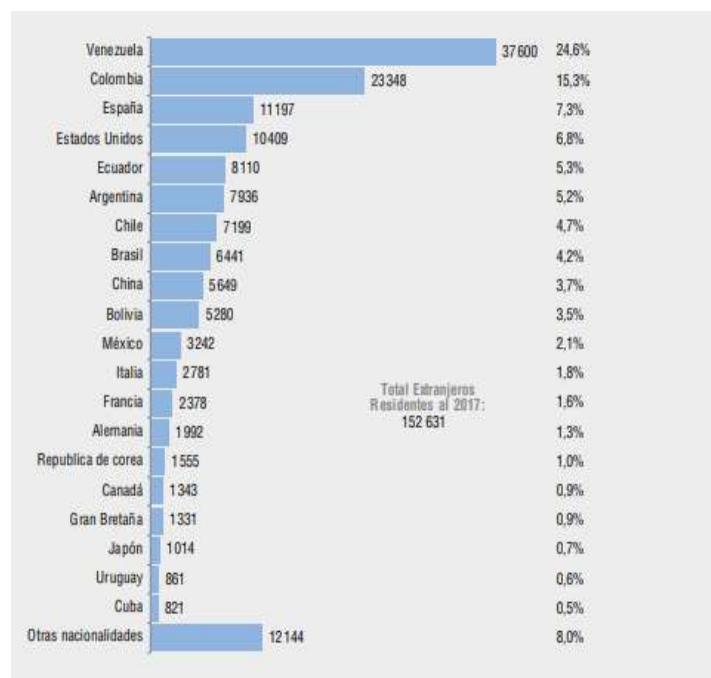
CALIDAD MIGRATORIA (*)	F	%	M	%	Total general	%
Turista	927	59%	638	41%	1565	80%
Trabajador	25	45%	31	55%	56	3%
Permiso Temporal de Permanencia - PTP	23	50%	23	50%	46	2%
Ingreso clandestino	16	43%	21	57%	37	2%
Residente	20	57%	15	43%	35	2%
Familiar de Residente	20	63%	12	38%	32	2%
Nacional	9	50%	9	50%	18	1%
Refugiado	4	31%	9	69%	13	1%
Temporal	5	56%	4	44%	9	0%
Inmigrante	6	75%	2	25%	8	0%
Estudiante		0%	3	100%	3	0%
Rentista	2	67%	1	33%	3	0%
Especial	1	50%	1	50%	2	0%
Convenio Mercosur	1	50%	1	50%	2	0%
Tripulante		0%	1	100%	1	0%
Solicitante de refugio	1	100%		0%	1	0%
Residente permanente		0%	1	100%	1	0%
Religioso		0%	1	100%	1	0%
Con impedimento de ingreso	1	100%		0%	1	0%

1.4. EXTRANJEROS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:

Cuando hacemos referencia a la vulnerabilidad de una persona extranjera, la respuesta más rápida que se nos viene a la mente, son los extranjeros con una situación irregular, es decir quienes entraron al país sin pasar el control migratorio, pues no tenían la documentación necesaria o perdieron la situación de regularidad por diversas circunstancias.

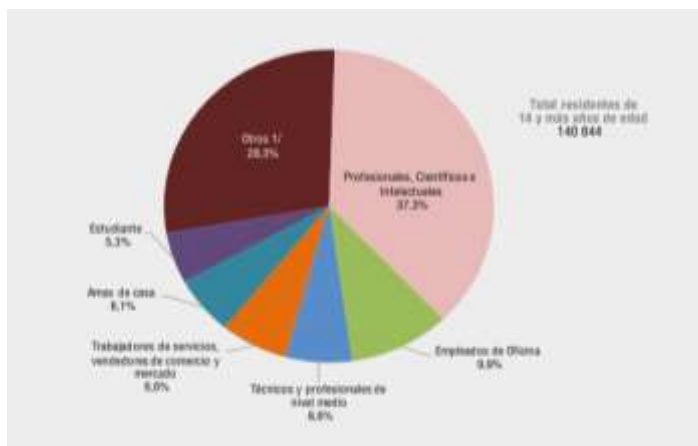
Situaciones de vulnerabilidad	F	%	M	%	Total	%
Situación migratoria irregular	634	59%	435	41%	1069	57%
Situación de pobreza o pobreza extrema	218	65%	116	35%	334	17%
Grave enfermedad	168	49%	176	51%	344	18%
Persona adulta mayor	137	48%	150	52%	287	15%
Menor de edad	108	58%	77	42%	185	10%
Mujer embarazada	142	100%		0%	142	7%
Discapacidad	12	30%	28	70%	40	2%
Víctima de violencia familiar	26	84%	5	16%	31	2%

1.5. EXTRANJEROS DE ACUERDO A SU NACIONALIDAD:



1.6. DE ACUERDO A SU OCUPACIÓN, AL AÑO 2017:

Podemos observar que el porcentaje de hombres empleados es mayor al de las mujeres, excepto en la categoría estudiantes y amas de casa.



2. SENTENCIAS ANALIZADAS.

En la investigación se optó por recoger los casos constitucionales en que se hayan presentado vulneraciones al derecho tratado, sin embargo haciendo una investigación en la Corte de Justicia de la ciudad de Chiclayo (Juzgados y Salas Penales y Civiles) no se ha presentado casos de esta magnitud, teniendo en cuenta muchas veces la desinformación o el problema de no contar con la documentación debida, sin embargo, hemos analizado las principales sentencias de la Corte Interamericana sobre la materia, las mismas que nos dan una idea del correcto procedimiento que debe tener el Estado cuando se presente una vulneración de tal magnitud, pues como país en vías de desarrollo y actualmente contando con un índice alto de migración, no podemos dejar desprotegido a los extranjeros que vean vulnerados sus derechos.

2.1. Caso Nadege Dorzema vs. República Dominicana.

HECHOS: Tuvieron lugar el 18 de junio del año 2000, en la ciudad dominicana de Botoncillo, cuando un camión que transportaba

aproximadamente a 30 migrantes de origen haitiano, no frenó en un puesto de control. Esto desencadenó una persecución que terminó con una serie de disparos por parte de la milicia hacia los nacionales haitianos y la posterior volcadura del camión, lo que dejó como resultado siete muertes y una decena de heridos; asimismo mientras una parte de los sobrevivientes fue trasladado a un hospital donde no se les entregó la atención debida, otra parte de ellos fue detenida y amenazada con ser aprisionada, señalándoles que para volver a la frontera con su país debían trabajar en el campo o pagar dinero a los agentes. Estas expulsiones fueron consideradas por los demandantes como “colectivas”, en tanto la rapidez con que se llevaron a cabo impidió que se hiciese un examen individual de la situación de cada persona, y que en forma posterior se pudiese recurrir de la expulsión.

FALLO: Se dio el 24 de octubre del 2012. Entre sus consideraciones más relevantes, la Corte ha resaltado el hecho de garantizar el contenido del artículo 22° para que la persona pueda desarrollarse plenamente, lo que no ocurre si se expulsa de manera arbitraria y colectiva a un extranjero. Es importante resaltar que el procedimiento para la expulsión de un extranjero no debe considerar ningún tipo de discriminación. De lo expuesto se desprende que la expulsión de los nueve migrantes haitianos no siguió los estándares internacionales en la materia ni los procedimientos previstos en la normativa interna, no se respetó ninguna de sus garantías mínimas como extranjeros, violándose el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

Por lo que se dispuso que el Estado de República Dominicana era internacionalmente responsable por violar el noveno numeral de este artículo, que dispone: “Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”. Al respecto cabe decir que existe un procedimiento legal que establece las circunstancias que deben darse para que pueda expulsarse a un extranjero, y las condiciones en las que éstas deben realizarse, con sus respectivas limitaciones, dentro de las cuales se encuentra el hecho de que las expulsiones deben realizarse de manera individual, y no colectivamente.

La razón de lo anterior radicaría en que con ello se les estaría negando su calidad de persona merecedora de un trato y procedimiento individual en virtud de sus particularidades y situación específica, dado que “en este tipo de casos es claro que no existe una evaluación de la condición particular de cada extranjero”, y por tanto las razones de las expulsiones colectivas se basarían en consideraciones de grupo. De esta forma, es dable entender que en el caso se configuró una expulsión colectiva de los migrantes haitianos, toda vez que no se dio cumplimiento a las garantías mínimas en sus expulsiones. No hubo un examen individual de la situación de cada uno de ellos que arribara a la necesidad de expulsarlos, sino que más bien esa decisión fue tomada en consideración a las características del grupo (discriminación por nacionalidad).

2.2 Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.

HECHOS: Expulsiones sufridas por familias haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, que a partir de 1990, y por casi una década, fueron expulsadas sistemáticamente de territorio dominicano por autoridades de dicho país, alegándose por parte de éstas que no existió un análisis previo e individual de su situación, sino que obedeció meramente a su nacionalidad u origen haitiano, teniendo como causa una discriminación estructural hacia las personas provenientes de Haití.

FALLO: Se dictó el 28 de agosto del 2014. Los considerandos más relevantes en relación a la condena de las expulsiones colectivas efectuadas son los siguientes: Se sostuvo que para cumplir con la prohibición de las expulsiones colectivas, cada proceso deberá evaluar las circunstancias personales de cada sujeto, lo cual requiere, como mínimo, identificar a la persona y aclarar las circunstancias particulares de su situación migratoria. Asimismo, dicho procedimiento no debe discriminar en razón de nacionalidad, color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, origen

social u otro estatus, y ha de observar las señaladas garantías mínimas. En el caso expuesto, he de notarse que las personas haitianas detenidas fueron expulsadas en menos de 48 horas, sin evidenciarse que hayan sido objeto de un examen individualizado previo a la expulsión, además de considerar las declaraciones de las víctimas, quienes dijeron que las expulsiones se realizaron de forma grupal y sumaria; en razón de lo anterior, la Corte concluyó que no se realizaron las expulsiones con base a evaluaciones individuales, para efectos del artículo 22° inciso 9 de la Convención Americana.

CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Finalmente llegamos al capítulo donde debemos analizar los resultados en relación a la hipótesis planteada, la misma que buscaba una respuesta al tratamiento frente a la presencia de del derecho no enumerado de expulsión colectiva, poniéndose especial énfasis en el procedimiento y presupuestos predeterminados, los cuales deberán ser evaluados de forma independiente atendiendo las características específicas, además de observar en todo momento lo previsto en la Constitución y Tratados Internacionales a través de los dispositivos que permiten incluir derechos no enumerados.

Siendo así, dado que en el Lambayeque no se ha presentado de casos de Hábeas Corpus y Acciones de Amparo presentados frente a la vulneración de la no expulsión colectiva, pero que a nivel de jurisprudencia regional, ya se ha establecido parámetros para su medida, la hipótesis resulta ser VERDADERA; pues en nuestro sistema normativo, no está contemplada expresamente la prohibición de este tipo de expulsiones, por lo tanto como recomendación a la aplicación de un derecho no enumerado, es necesario aplicar la salida que nos muestra la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución, analizando así, tratados internacionales ratificados por el Perú que en este caso si lo reconocen “en el papel”. Por ello resulta importante tomar cada caso con pinzas, pues se puede dar una expulsión colectiva, hacia personas extranjeras que no han sido identificadas personalmente, ni les han permitido ejercer sus derechos de forma individual, aplicando simplemente las políticas migratorias, sin antes evaluar las necesidades del inmigrante, siendo necesario llevar un debido proceso.

CONCLUSIONES.

- Debemos regirnos por el sistema de números apertus que ha consignado nuestra Constitución, a través del artículo 3° y la IV Disposición Final y Transitoria, además de sustentar una expulsión colectiva en la base de los principios como el de no discriminación y el de unidad familiar.
- No se considerará que existe una violación, cuando la situación personal de cada extranjero afectado haya sido examinada individualmente, siendo necesario además que en caso varios extranjeros fueran expulsados por decisiones similares, no puede concluirse la existencia de una expulsión colectiva cuando cada una de las partes interesada pueda alegar, de forma individual, ante las autoridades competentes los argumentos en contra, pudiendo aplicar a partir de esto, los mecanismos procesales que habiliten su eficaz y rápida protección.
- Se hará necesario analizar la expulsión desde la óptica administrativa, la misma que deberá aplicar las garantías de las expulsiones individuales en salvaguarda de cada extranjero, asimismo, deben aplicarse las medidas del debido proceso, protección judiciales y jurisdiccionales consignadas en organismos internacionales como en la Convención Americana; y si notamos que efectivamente estamos frente a una expulsión colectiva, podremos hacer uso del hábeas Corpus y el amparo, quienes permitirán resguardar el núcleo protegido de este derecho fundamental.

RECOMENDACIÓN.

Cuando se presente un caso de posible vulneración del derecho de expulsión colectiva de extranjeros, debe darse un estudio con el mayor detenimiento posible de cada caso, teniendo en cuenta la situación individual de cada extranjero expulsado, aplicando los principios constitucionales de no discriminación y la unidad familiar, además de la correcta aplicación del debido proceso dentro del ámbito administrativo y de la tutela jurisdiccional efectiva en caso de instancias judiciales, observando la construcción de argumentos jurídicos que servirán de base para sustentar una expulsión y si bien puede existir un precedente, este deberá ser aplicado de forma tal que se adecue a las necesidades del caso en concreto.

BIBLIOGRAFÍA.

- *Apuntes sobre jurisprudencia del TEDH en materia de expulsiones colectivas: el artículo 4 del Protocolo 4 al Convenio.* (22 de setiembre de 2015). Obtenido de <https://www.abogacia.es/2015/09/25/apuntes-sobre-jurisprudencia-del-tedh-en-materia-de-expulsiones-colectivas-el-articulo-4-del-protocolo-4-al-convenio/articulo> V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. (s.f.).
- BIDART CAMPOS, Germán J. "Los derechos no enumerados en su relación con el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional". *Derecho y Sociedad* N° 18. Págs. 256-261.
- BOLLO AROCENA, M. D. (s.f.). Límites personales y materiales al derecho de los estados a la expulsión de extranjeros. Una visión desde el derecho internacional público. 146.
- Carbonel, M. (Primera edición, diciembre del 2002). *Teoría Constitucional y Derechos Fundamentales*. México DF: Comisión Nacional de Derechos Humanos.
- CASTAÑEDA OTSU, Susana Inés. "El principio de interpretación conforme a los tratados de derechos humanos y su importancia en la defensa de los derechos consagrados en la Constitución". Págs. 11-126.
- Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. (s.f.).
- CASTILLO CÓRDOVA, L. (2004). *Hábeas Corpus, Amparo y Hábeas data*. Pág. 56. Universidad de Piura. Colección Jurídica ARA Editores E.I.R.L.
- Constitución española de 1978, artículo 10, apartado 2. (s.f.).
- Convenio de Roma, suscrito el 4 de noviembre de 1950, entrando en vigor el 3 de setiembre de 1953. (s.f.).
- DE DIENHEIM BARRIGUETE, C. M. (2013). El artículo 33 de la Constitución y la expulsión de personas extranjeras. *Instituto de Investigaciones Jurídicas. México*, 1654.
- Especial, M. K. (19 de abril del 2007). *Documento A/CN.4/581. Expulsión de Extranjeros: Tercer informe sobre la expulsión de extranjeros*. Fundamneto 134. Pág 26. Fundamento 103. Pág. 21.
- ETO CRUZ, Gerardo. *Derecho Procesal Constitucional. Su interpretación y desarrollo jurisprudencia*. Grijley E.I.R.L. Sexta Edición. Lima, febrero del 2019.
- GARZÓN-BUENAVENTURA, Edgar Fabián. "Derechos innominados en el sistema interamericano". *Revista de Derecho Constitucional Dixi* 24. Colombia, octubre 2016. Págs. 11-23. Pág. 21.

- GROSS ESPIELL, Héctor. "Los Derechos Humanos no enunciados o no enumerados en el Constitucionalismo Americano en el artículo 29. C) de la Convención Americana de Derechos Humanos", en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional número 4. Enero-diciembre 2000.
- *La expulsión de extranjeros en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* (abril de 2016). Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332016000100001
- *La ONU advierte a la UE de que la "expulsión colectiva" está prohibida.* (9 de marzo de 2016). Obtenido de https://elpais.com/internacional/2016/03/08/actualidad/1457435676_657104.html
- LÓPEZ FLORES, B. J. (Primera edición diciembre del 2013). *Amparo contra resoluciones judiciales. Cómo llevar un caso ordinario a un proceso de amparo*. Lima Perú: Tc Gaceta Constitucional.
- LOBATÓN PALACIOS, Miguel David. La Gestación del Estado constitucional Interamericano en el Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados. Tesis para optar por el grado académico de doctor. Lima. Mayo 2016. Pág. 28, citando a Ferreira.
- MARTINEZ PEREZ, O. (Volumen I - Número 9, mayo 2013). La expulsión de extranjeros y la labor de organismos internacionales al respecto. Comentarios de Cátedra. *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*.
- Migraciones, O. I. (octubre 2018). *Estadísticas de la Emigración Internaonal de peruanos e Inmigración de Extranjeros, 1990-2017*. Lima: Primera Edición.
- NAVARRO ARACENA, Javier Ignacio. Análisis crítico de los derechos constitucionales implícitos. Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Público. Memoria para optar por el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago de Chile, 2015.
- NOGUEIRA ALCALÁ, H. (Chile). La soberanía, las constituciones y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. *Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Talca*, 342.
- ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Los derechos humanos. Su desarrollo y protección. Ediciones BLG. Edición 2006. Perú.
- PALACIOS SANABRIA, M. T. (2013). Los derechos de los extranjeros como límite a la soberanía de los estados. *International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 10.
- Sentencia N° 3-2005-AI/TC. Fundamento Jurídico 42.

- Sentencia N°050-2004-AI/TC. Fundamento Jurídico 72.
- Sentencia N°568-1996-HC/TC. Fundamento Jurídico 2. (s.f.).
- Sentencia N° 0976-2001-AA/TC. Fundamento Jurídico N.º 5.
- Sentencia N°1289-2000-AA/TC. Fundamento jurídico 5. (s.f.).
- Sentencia N° 2209-2002-AA/TC. Fundamento Jurídico 15.
- Sentencia N°2273-2005-HC/TC. Fundamento Jurídico 5.
- Sentencia N° 02744-2015-PA/TC, F.J. 32.
- Sentencia N° 5854-2005-PA/TC. Fundamento Jurídico 27.
- Sentencia N° 10087-2005-PA/TC. Fundamento Jurídico 6.
- *Situación de los migrantes extranjeros en el Perú y su acceso a servicios sociales, servicios de salud y de educación*. Lima, Perú. (diciembre del 2015).
- SOLANES CORELLA, Á. (27 de diciembre del 2017). Artículo contra la normalización de la ilegalidad: La protección judicial de los extranjeros frente a las expulsiones colectivas y las devoluciones en caliente. *Instituto de Derechos Humanos. Universidad de Valencia*.
- SOSA SACIO, Juan Manuel. "Derechos Constitucionales no enumerados y derecho al libre desarrollo de la personalidad". Área de derecho constitucional de Gaceta Jurídica. Págs. 97-147.

TESIS FINAL

por Ana Milena Reupo Vasquez

Fecha de entrega: 20-may-2020 01:24p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 1328571767

Nombre del archivo: INFORME_FINAL-1.docx (1.79M)

Total de palabras: 17212

Total de caracteres: 94470

TESIS FINAL

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

18%

FUENTES DE
INTERNET

6%

PUBLICACIONES

11%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	www.derechosdelainfancia.cl Fuente de Internet	2%
2	www.iri.edu.ar Fuente de Internet	1%
3	legal.un.org Fuente de Internet	1%
4	www.ehu.eus Fuente de Internet	1%
5	tesis.pucp.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	www.scielo.org.co Fuente de Internet	1%
7	digitallibrary.un.org Fuente de Internet	1%
8	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	1%
9	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del	1%

Peru

Trabajo del estudiante

10	documentop.com Fuente de Internet	1%
11	www.justiciamisiones.com.ar Fuente de Internet	1%
12	www.amag.edu.pe Fuente de Internet	<1%
13	zonasegura.seace.gob.pe Fuente de Internet	<1%
14	idus.us.es Fuente de Internet	<1%
15	www1.umn.edu Fuente de Internet	<1%
16	archive.org Fuente de Internet	<1%
17	vvallejo.com Fuente de Internet	<1%
18	www.scribd.com Fuente de Internet	<1%
19	www.jurisprudencia.pe Fuente de Internet	<1%
20	dspace.unitru.edu.pe Fuente de Internet	<1%

21	derecho.utalca.cl Fuente de Internet	<1 %
22	www.wcl.american.edu Fuente de Internet	<1 %
23	odhpi.org Fuente de Internet	<1 %
24	Submitted to Universidad Católica San Pablo Trabajo del estudiante	<1 %
25	pt.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
26	www.investigacion.biblioteca.uvigo.es Fuente de Internet	<1 %
27	www.oda-alc.org Fuente de Internet	<1 %
28	www.corteidh.or.cr Fuente de Internet	<1 %
29	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
30	www.cndh.mx Fuente de Internet	<1 %
31	www.tc.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
32	Ana López-Sala, Iker Barbero. "Solidarity under	<1 %

siege: The crimmigration of activism(s) and protest against border control in Spain", European Journal of Criminology, 2019

Publicación

33	www.oas.org Fuente de Internet	<1 %
34	www.cpacf.org.ar Fuente de Internet	<1 %
35	www.intertournet.com.ar Fuente de Internet	<1 %
36	clubensayos.com Fuente de Internet	<1 %
37	www.unicef.org Fuente de Internet	<1 %
38	corteidh.or.cr Fuente de Internet	<1 %
39	Diego Andrés Molina Conzué. "La medida de expulsión administrativa de extranjeros en el derecho chileno: límites materiales y formales", Estudios de Derecho, 2020 Publicación	<1 %
40	www.pcslatin.org Fuente de Internet	<1 %
41	www.ongporpalestina.org Fuente de Internet	<1 %

	Fuente de Internet	<1%
53	Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante	<1%
54	www.ombudsman.gob.pe Fuente de Internet	<1%
55	www.scielo.org.mx Fuente de Internet	<1%
56	Vargas, Jorge A.. "Expulsion of foreigners in Mexico: a commentary on the new "administrative procedure of exclusion" proposed by President Enrique Peña Nieto under the reglementary act of article 33 of the Constitution / Expulsão de estrangeiros no México:...", REVISTA QUAESTIO IURIS, 2015. Publicación	<1%
57	www.venezuelaprocesal.com Fuente de Internet	<1%
58	worldwidescience.org Fuente de Internet	<1%
59	"International Human Rights of Children", Springer Science and Business Media LLC, 2019 Publicación	<1%
60	vladimiralfaro0117.blogspot.com	

	Fuente de Internet	<1 %
61	Submitted to Universidad de Burgos UBUCEV Trabajo del estudiante	<1 %
62	Druscilla L. Scribner. "The Judicialization of (Separation of Powers) Politics: Lessons from Chile", Journal of Politics in Latin America, 2019 Publicación	<1 %
63	www.docstoc.com Fuente de Internet	<1 %
64	espacinsular.org Fuente de Internet	<1 %
65	www.3500000dearboles.com Fuente de Internet	<1 %
66	www.desaparecidos.org Fuente de Internet	<1 %
67	derechos.org.ve Fuente de Internet	<1 %
68	www.justiciaviva.org.pe Fuente de Internet	<1 %
69	escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr Fuente de Internet	<1 %
70	www.programamujerescdh.cl Fuente de Internet	<1 %

71	Submitted to Universidad Católica de Santa María Trabajo del estudiante	<1%
72	diposit.ub.edu Fuente de Internet	<1%
73	news.caribseek.com Fuente de Internet	<1%
74	www.procuraduria.gov.co Fuente de Internet	<1%
75	de.scribd.com Fuente de Internet	<1%
76	www.pagina-libre.org Fuente de Internet	<1%
77	Submitted to University of Newcastle upon Tyne Trabajo del estudiante	<1%
78	docplayer.es Fuente de Internet	<1%
79	www.archivos.ujat.mx Fuente de Internet	<1%
80	www.ctera.org.ar Fuente de Internet	<1%
81	luislingaderechoypolitica.blogspot.com Fuente de Internet	<1%
es.scribd.com		

42	www.apdpc.org Fuente de Internet	<1 %
43	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1 %
44	www.ecoi.net Fuente de Internet	<1 %
45	www.undp.org.mx Fuente de Internet	<1 %
46	estudiobedoya.com.ar Fuente de Internet	<1 %
47	www.upt.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
48	www.cladem.org Fuente de Internet	<1 %
49	www.webmii.es Fuente de Internet	<1 %
50	pirhua.udep.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
51	Hidemberg Alves da Frota. "Motivação e devido procedimento administrativo no tribunal constitucional do peru e questões correlatas", Revista Digital de Direito Administrativo, 2014 Publicación	<1 %
52	www.elsevier.es	

82	Fuente de Internet	<1 %
83	www.otrosi.net Fuente de Internet	<1 %
84	tiptiktak.com Fuente de Internet	<1 %
85	Submitted to Instituto de Empress S.L. Trabajo del estudiante	<1 %
86	www2.scjn.gob.mx Fuente de Internet	<1 %
87	www.estrellacardonagamio.com Fuente de Internet	<1 %
88	Daniela Gonçalves Menengoti Ribeiro, Gustavo Noronha de Ávila, Mayra dos Santos Zavattaro. "O SISTEMA INTERAMERICANO E O DIREITO DA CRIANÇA EM PRESTAR DECLARAÇÕES NO PROCESSO PENAL: GARANTIAS PARA RECONHECIMENTO DE SUA PERSONALIDADE", Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, 2017 Publicación	<1 %
89	unaderealidadpocohecha.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
90	Petersen, Zilah Maria Callado Fadul and Rocha, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. "Coletânea	<1 %

de estudios jurídicos", Superior Tribunal Militar, 2009.

Publicación

91

Submitted to Universidad Sergio Arboleda

Trabajo del estudiante

<1%

92

Enrique Gil Botero. "Amparo universal de los derechos de los migrantes. Marco comparativo y convencional de protección", Estudios de Derecho, 2019

Publicación

<1%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Apagado